

HERNÁN MOREANO URIGÜEN*

FRONTERA, POBREZA Y VULNERABILIDADES

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo abordará la situación de la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia en el período 2000-2005, frente a la política antinarcóticos patrocinada por los Estados Unidos para la reducción de los cultivos de hoja de coca en los departamentos colombianos de Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. Este aspecto entra en el contexto de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos (febrero 2003) en la que el conflicto interno de Colombia representa la principal amenaza a los intereses norteamericanos de fomentar la democracia y el libre mercado a lo largo y ancho del continente, debido a la expansión del narcotráfico y las operaciones de los actores armados -declarados como terroristas por la Casa Blanca- a las naciones vecinas.

* Hernán Moreano se desempeña como estudiante del doctorado en relaciones internacionales en la Universidad de British Columbia en Canada. Fue profesor de la Universidad Internacional del Ecuador, e investigador asociado al área de relaciones internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-sede Ecuador). Es licenciado en Comunicación social por la Universidad Central del Ecuador y es master en relaciones internacionales por la FLACSO.

El Ecuador ha reforzado militarmente su frontera con 8.000 hombres¹, y ha proyectado planes de ayuda social en las zonas más marginadas y vulnerables de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. En tal sentido, con el fin de prevenir el auge de la delincuencia y la venta de productos ilegales, se creó la Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR) que ha elaborado desde el 2001 obras de infraestructura, como caminos vecinales, puentes y sistemas de agua potable y alcantarillado. Los pueblos fronterizos no cuentan con una infraestructura en educación, salud y albergues adecuada para recibir a los desplazados, además, estas zonas fronterizas, enfrentan una crisis económica y laboral como consecuencia de la dolarización en Ecuador desde enero del 2000.

Por último, las fumigaciones con el herbicida glifosato, que es esparcido por vía aérea en los cultivos de coca en territorio colombiano, han afectado los cultivos lícitos de los campesinos ecuatorianos, y también la salud de los mismos –generándoles manchas en la piel y pérdida de cabello-. Por este último punto, el gobierno del Ecuador, como parte de una política exterior que se basa en el principio de “soberanía y libre determinación de los pueblos”, ha exigido a Colombia respetar 10 Km. de no fumigación para evitar problemas, pero esto no ha sido efectivo hasta la actualidad debido a las diferentes estrategias que se manejan tanto en Bogotá como en Quito. Por ejemplo, en agosto de 2005, en el rancho Crawford de Texas, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, respaldó a su homólogo colombiano Álvaro Uribe comprometiéndose a seguir financiando al Plan Colombia en los próximos dos años, mientras el canciller ecuatoriano, Antonio Parra Gil, cuestionaba las fumigaciones a su contraparte colombiana Carolina Barco (El Comercio, 2005).

Estos detalles llevan a plantearse como hipótesis que la debilidad institucional ecuatoriana, relacionada con la forma en que se maneja el desarrollo en la frontera norte, constituye el factor principal que favorece el incremento de la pobreza en la zona, cuya vida social se desenvuelve en contextos externos e internos de vulnerabilidad, situación que ha generado, a su vez, el involucramiento ecuatoriano en el Plan Colombia. Por lo tanto, la pregunta que se intentará responder será si tiene el Ecuador los recursos institucionales suficientes para reducir la pobreza en la frontera norte desde la vigencia del mencionado Plan.

1 Hasta 14 millones de dólares al mes gasta Ecuador en el cuidado de la frontera norte, por la movilización y mantenimiento de sus tropas, a propósito del conflicto interno que afecta a Colombia. “[...] ese presupuesto bien podría invertirse en proyectos de desarrollo comunitario en la región, asolada por la pobreza”. (González, 2005).

Como principal objetivo se identificará el déficit de las diferentes instituciones públicas y privadas que brindan apoyo al desarrollo social y económico en la zona de frontera, lo que lleva a plantear los siguientes objetivos específicos en cada uno de los capítulos a desarrollar:

- Analizar la política antidrogas norteamericana hacia la subregión y su influencia en el diseño de las políticas públicas de seguridad y desarrollo;
- Identificar las políticas y estrategias de los principales actores dentro de la toma de decisiones de Quito, Bogotá y a nivel de la Comunidad Andina de Naciones para los planes de desarrollo en las fronteras;
- Identificar, ordenar y analizar los principales efectos socio-económicos en la zona durante la vigencia del Plan Colombia.

En el primer capítulo se hará una crítica de la mencionada política antidrogas y a sus efectos en la frontera en estudio con el fin de establecer políticas y estrategias que den prioridad al desarrollo social y económico de los pueblos y no tan sólo a la presencia militar/policial para un control efectivo.

El segundo capítulo abordará el concepto de frontera y cómo ésta es percibida frente a los conflictos con los diversos actores transnacionales involucrados en negocios ilícitos. Se hará también, una breve descripción de las políticas de desarrollo existentes a nivel fronterizo en los últimos cinco años para integrar a las diversas poblaciones al desarrollo nacional. Se indagará acerca de los roles desempeñados por instituciones como la UDENOR, por parte del Ecuador, y el Fondo de Inversión por la Paz (FIP), en el caso de Colombia, al coordinar y ejecutar obras de infraestructura. Por otra parte, se analizará el rol de la Comunidad Andina de Naciones para fomentar el desarrollo en cada una de las fronteras.

Por último, el tercer capítulo estudiará la influencia represiva de los Estados Unidos en la frontera colombo-ecuatoriana en su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla colombiana, y se analizará también la situación social y económica de las poblaciones fronterizas que en la actualidad sufren las consecuencias de la posición norteamericana.

La información para elaborar el presente documento es resultado de los trabajos de campo realizados en las poblaciones fronterizas en Esmeraldas, Carchi y, Sucumbíos; entrevistas a académicos, diplomáticos, militares y miembros del gobierno nacional y de Organismos No Gubernamentales (ONG) de Quito y Bogotá. Además, se revisaron datos estadísticos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del

Ecuador (SIISE), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y datos de prensa de Ecuador y Colombia. Se revisaron también informes y boletines de instituciones que manejan los temas de desplazados, derechos humanos, fumigaciones, narcotráfico, seguridad, democracia y desarrollo.

CAPÍTULO I. MODELO POLÍTICO DE DESARROLLO Y SEGURIDAD

1.1. ¿UNA ESTRATEGIA FALLIDA?

Los EE.UU. gastan anualmente entre 35 mil y 40 mil millones de dólares por año en su guerra contra las drogas; la mayor parte en “interdicción e inteligencia” (Naím, 2003: 59); pero la creatividad y la audacia de los carteles de la droga “han hecho con regularidad grandes huecos en las estrategias del gobierno” (Naím, 2003: 60). A pesar de que el 2004 fue el año en que más se fumigó en Colombia, como estrategia prioritaria del gobierno nacional para erradicar la oferta (más de 130 mil hectáreas), el Departamento de Estado de Estados Unidos, con base en imágenes satelitales tomadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), señaló que las hectáreas sembradas con coca no disminuyeron en el año 2004. A diciembre de ese año, el sistema registró 114 mil hectáreas sembradas con coca, la misma cifra que reportó para el año 2003, cuando la reducción fue de más del 30% respecto del 2001, 56 mil hectáreas según el Departamento de Estado (de 169 mil en 2001 a 114 mil en 2003).

Según Naciones Unidas, en el año 2004, las hectáreas sembradas disminuyeron en 6 mil. Para Alfredo Rangel Suárez, de la fundación Seguridad y Democracia, esto da a entender que para “erradicar una hectárea se requiere fumigar 22, y que para erradicar las 80 mil supuestamente existentes se deberían fumigar 1 millón 700 mil hectáreas” (Rancel, 2005). Por lo tanto, Rangel lo considera irracional, “al menos en términos de eficiencia operacional y técnica”, para no hablar de los “aspectos políticos, sociales y económicos”².

Por otra parte, en los Estados Unidos mucho se ha debatido sobre el fracaso de las políticas antidrogas. Glen Segell en su ensayo

2 Para Rangel “los cultivos de coca han migrado hacia áreas cada vez más distantes, a zonas montañosas, y la mayoría son cultivos pequeños, muy dispersos y que se confunden con los cultivos lícitos de familias campesinas. Todo esto atenta contra la eficacia de las fumigaciones y las hace muy costosas: económicamente, porque cada vez hay que fumigar más lejos; socialmente, porque buena parte de los cultivos son de familias campesinas y la fumigación afecta su ingreso y su alimento; políticamente, porque sigue echando en brazos de la guerrilla y de los paramilitares a la población campesina, poniéndola en contra del Estado”.

La guerra antinarcoóticos y las relaciones cívico-militares sostiene que “mientras los individuos son adictos al consumo de drogas, sus sociedades llegan a ser adictas al capital que es generado en el negocio de las drogas” (Segell, 2000: 12), lo que muchas veces sirve para financiar a las “propias agencias antidrogas y a la vez da empleo a los miles de oficiales antinarcoóticos a nivel mundial”. Es así que esta lucha se vuelve un círculo vicioso. Además añade que la corrupción aumenta en las naciones en las que se incautan las drogas “debido al poder del dinero para sacar a los narcos de las cárceles o sobornar jueces” (Segell, 2000:9).

Respecto a la lucha contra el terrorismo, después del 11 de septiembre de 2001, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) ha señalado “que no existen indicios de actividad terrorista islámica que pongan en peligro la seguridad estadounidense”³. Sin embargo, las transferencias y ayuda económica hacia la región “se concentran principalmente en lo militar” (Álvarez, 2005: 1), lo que según varias agencias internacionales —*Washington Office for Latin America* (WOLA)- ha repercutido en “una preocupante intromisión de los militares en áreas como la prevención de delitos de seguridad pública o generación de política sectorial sin el adecuado control civil”⁴ (WOLA, 2005a:1).

El mayor receptor de ayuda militar en la región es Colombia: sólo durante 2003 este país recibió USD 553 millones, mientras que otros USD 122 millones fueron transferidos a programas de inversión social⁵ (WOLA, 2005a:1). Críticos norteamericanos del Plan Colombia como Adam Isacson consideran que se debería enviar mayores recursos hacia “la promoción del desarrollo alternativo que den a los granjeros incentivos a abandonar la coca y construyan mayor infraestructura para mejorar el mercado de cultivos legales como la yuca y azúcar” (Contreras, 2005: 3).

3 Discurso pronunciado por el General Bantz Craddock, Comandante del Comando Sur de los EE.UU., el 9 de marzo del 2005. The Center for International Policy. Visitada el 25 de junio de 2005 <<http://www.ciponline.org/colombia/050309crad.pdf>>

4 “Las pandillas juveniles en Centroamérica son un problema serio, que requiere soluciones que abarquen los servicios sociales, educativos, desarrollo económico y fortalecimiento de la ley...No es un problema que requiera de lo militar”. Discurso de Joy Olson, directora ejecutiva del WOLA, el 9 de marzo de 2005. Visitada el 9 de agosto de 2005. <http://www.wola.org/security/release_southcom_posture_030905.htm>

5 El total de transferencias entre el año 2000-2005 suman los USD 4 mil millones. Ver documento WOLA septiembre 2004 “Diluyendo las divisiones: tendencia de los programas militares de los EE.UU. para América Latina”. Visitada el 9 de agosto de 2005. <http://www.wola.org/publications/military_diluyendo_las_divisiones.pdf>

En la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, en noviembre de 2004, hubo consenso al definir los problemas para la estabilidad y la democracia: la pobreza, inequidad y seguridad pública⁶. Aún así, la ayuda militar norteamericana se mantendrá para los próximos años en la región y aún más para Colombia, de acuerdo al apoyo que el presidente George W. Bush brindó en su visita a Cartagena en noviembre del 2004 y en la visita de Álvaro Uribe en agosto del 2005 al rancho Crawford en Texas.⁷

El Cuadro 1 describe el número de efectivos entrenados por los Estados Unidos:

Cuadro 1. Efectivos entrenados por EE.UU. en Colombia

País	1999	2001	2002	2003	Total
Colombia	2.476	6.300	6.477	12.947	28.200
Ecuador	681	899	1.267	662	3.509

Fuente: WOLA, 2005a: 3

En el ámbito regional, la política de los países andinos, por su parte, ha “sido reactiva” (Bonilla, 2000: 9). La instancia de integración, que es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), si bien tiene una retórica en la política exterior; “no ha sido capaz de procesar un solo mecanismo eficiente para agregar en una instancia compartida los intereses de los países andinos frente a los Estados Unidos” (Bonilla, 2000:9). Tampoco se han desarrollado instrumentos institucionales que permitan “la generación de un espacio de seguridad cooperativa”, por lo que se podría confirmar que las relaciones de cada país andino con los EE.UU. han sido bilaterales. Tal es el caso de Ecuador que, frente a las políticas antinarcóticos planteadas por los EE.UU. “ha aceptado sin mayores dificultades la inclusión dentro de los acuerdos internacionales

6 Red de Seguridad y Defensa en América Latina, VI Conferencia de Ministros de Defensa. Declaración de Quito. Visitada el 9 de julio de 2005.

<<http://www.resdal.org/ultimos-documentos/vi-conf-min-decla.html>>

7 El presidente de Estados Unidos, George Bush, reconoció los logros obtenidos con el Plan Colombia, al señalar que “la delincuencia violenta en Colombia está a su nivel más bajo en 16 años”. El mensaje fue claro, pues el mandatario se comprometió a seguir respaldando en el Congreso de su país programas de ayuda posteriores al Plan Colombia. Uribe agradeció la cooperación de los Estados Unidos, calificándola como “ejemplar”, pues, según él, no se ha quedado en el discurso y “ha pasado a la práctica”. Aprovechó para pedir que la cooperación continúe, al señalar que “hemos avanzado, vamos ganando, pero todavía no hemos ganado”. Encuentro de Bush y Uribe en Texas, *diario El Tiempo*, Bogotá, 5 de agosto de 2005.

les contra el tráfico de drogas ilegales” (Bonilla, 2000:11). Para Alexei Páez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador, las capturas hechas a narcotraficantes, “a más de evidenciar lo vertiginoso de este crimen, también muestran una cercanía de las fuerzas de control, especialmente de la Policía, con la política de seguridad estadounidense” (El Comercio, 2005) .

Lo expuesto da a entender que este enfoque represivo no da importancia a los aspectos sociales, políticos y económicos que han llevado al desarrollo de actividades ilícitas. La realidad es otra, ante la erradicación forzada o las fumigaciones, las cuales

no fortalecen la lealtad de los campesinos al Estado; más bien sucede todo lo contrario al colocarse el Estado como enemigo del campesino, lo que ha generado que muchos de ellos se afilien a movimientos guerrilleros o sean parte de negocios ilícitos que son las únicas opciones de empleo que ellos pueden percibir en Colombia (Thoumi, 2005: 47).

En consecuencia, para una funcionaria de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) en Colombia, es claro el cierre del espacio humanitario que se manifiesta en

la ausencia de un plan de contingencia como componente integral de la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno nacional en el sur-oriente del país, y en la ausencia de políticas de desarrollo socioeconómico para prevenir la vinculación de sectores sociales excluidos, a las economías ilícitas controladas por los grupos armados irregulares (Cevallos, 2005).

Por el lado ecuatoriano, se da a entender que “las diferencias que no han sido superadas entre Ecuador y Colombia y el temor de involucrarse en el conflicto interno de Colombia arruinaron la Política de Seguridad de la Frontera Norte ecuatoriana, emitida en el año 2000, que tenía como objetivo tener una frontera más segura y desarrollada” (Jarrín, 2005a: 1) como la mejor prevención ante las consecuencias del conflicto colombiano. La única estrategia sectorial que ha sido implementada en forma suficiente, en estos cinco años, ha sido la militar, “luego de haber logrado la firma del Concepto Estratégico Nacional por parte del Presidente de la República en el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), para la protección de la soberanía nacional” (Jarrín, 2005a: 1).

Para el Ecuador, Colombia vive un conflicto interno, mientras que para Colombia es una lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En la reunión de cancilleres y ministros de Defensa realizada en Bogotá,

en marzo del 2003, Ecuador no reconoció como terroristas a las FARC. De igual forma, la seguridad ecuatoriana se encuentra diferenciada de la defensa⁸ pero el énfasis en el desarrollo social es *puramente discursivo, y no se refleja en los hechos*(Yandún, 2005) en Tulcán.; mientras que en Colombia la defensa y la seguridad se encuentran fusionadas en razón del conflicto armado que vive⁹.

La estrategia militar para el Ecuador es de vigilancia, protección y, en última instancia, de ser necesario, de defensa, “mientras que en Colombia es de carácter ofensivo, con la intención de aniquilar y quebrantar la voluntad de lucha de los grupos insurgentes, para llevarlos forzados a una negociación que permita según los planteamientos oficiales a un restablecimiento de la paz” (Leal Buitrago, 2005).

Lo anterior da a entender que la influencia norteamericana en el control de las fronteras para disuadir a los actores inmersos en el narcotráfico y en otras actividades ilegales es fuerte a nivel militar/policial sin que Ecuador y Colombia puedan aún acordar políticas sociales y económicas que fomenten el desarrollo y la integración regional. A continuación se verá más detalladamente qué se ha hecho para fomentar el desarrollo en la frontera.

CAPÍTULO II. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS FRONTERIZAS

Si se maneja la frontera como el encuentro de diferentes construcciones sociales creadas por los individuos que habitan en un determinado territorio -a nivel comercial, económico, laboral, social, cultural-, se entenderá que ha generado que los límites del estado-nación sean los límites de otros simbolismos que se encuentran al otro lado de la frontera: prácticas y costumbres (Andreas,1998:7-8), como ha sido el caso de la frontera mexicano-norteamericana en donde los migrantes a Estados Unidos ven al norte como la tierra de las oportunidades y la riqueza, y el sur como el desempleo y pobreza.

En la actualidad, el Estado ecuatoriano ha dado importancia al control limítrofe militar/policial debido a la diversidad de “clandestinos actores transnacionales que atraviesan las fronteras con fines ligados al mercado negro de productos prohibidos en un territorio” (Andreas, 1998: 8-9), como se da con las drogas, armas, precursores químicos y abastecimientos para los grupos armados, y, más aún, cuando las autoridades de los diferentes gobiernos tienen su propia manera de ver a los diversos actores transfronterizos: guerrilla, paramilitares, desplazados, migrantes y delincuencia común/organizada.

8 Ver: Política de Seguridad y Defensa del Ecuador, Libro Blanco, 2002. Ministerio de Defensa Nacional.

9 Ver: Política de Seguridad Democrática, Gobierno de Álvaro Uribe, junio de 2003.

Por lo tanto se hace esencial revisar cómo Colombia y Ecuador han cuidado sus fronteras en los últimos cinco años.

2.1. PLAN, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Se entiende como *política pública* al conjunto de sucesivas respuestas del Estado, estructuradas a manera de un plan permanente con directrices generales para hacer frente a situaciones problemáticas de desarrollo y seguridad, “sobre las cuales se debentomar decisiones, que traducidas en planes de acción conduzcan a la solución de los problemas” (Jarrín, 2005a:1).

A nivel teórico toda política tiene un plan nacional que establece objetivos y prioridades sociales, y determina estrategias que buscan una mejor asignación de recursos. “A la vez el éxito del Plan depende de la calificada selección de proyectos y de los correspondientes programas sectoriales. Se espera una adecuada coordinación vertical, que se inicia en el plan, que compromete los programas sectoriales y regionales, y se materializa con los proyectos específicos” (Miranda, 2003: 1).

En las fronteras de Ecuador y Colombia coexiste

la insatisfacción de necesidades fundamentales primarias, especialmente en el ámbito rural, que compromete los sectores de: salud, alimentación, agua potable, vivienda, seguridad, educación, justicia, etc. (Funcionario de la UDENOR, 2005).

En este sentido, en un plan de desarrollo fronterizo se puede trabajar con proyectos que resuelvan las necesidades de la población; lo que convierte al proyecto en una “unidad operativa de desarrollo”, que sirve para alcanzar los objetivos establecidos en los planes y materializar los mejores índices de bienestar y desarrollo de las comunidades (Miranda, 2003: 2).

Dado que el plan nacional establece objetivos y prioridades sociales, y determina estrategias que señalan pautas para una mejor asignación de recursos, es obvio que la calificación de proyectos dependerá en alguna forma de su contribución al logro de dichos objetivos. Por esta razón, es que el éxito en la ejecución de los planes de desarrollo depende en gran parte de la adecuada selección de proyectos y de los correspondientes programas sectoriales (Miranda, 2003: 3).

En el caso de Ecuador y Colombia no se ha dado un interés por parte de los gobiernos centrales en atender las fronteras y “las políticas fronterizas se han dado con proyectos a corto plazo frente al fenómeno colombiano” (Ardila, 2005). Además, la línea de frontera aparece

como los “bordes y confines territoriales de un Estado en el que cada territorio es distinto al vecino, que constituye un espacio uniforme y una nación única, desprovista de contradicciones y espacios diversos” (Ramírez., 2004: 455). Este tipo de percepciones han generado desencuentros entre los gobiernos centrales y las poblaciones fronterizas, en la manera de trabajar los problemas de desarrollo y seguridad, “desconociendo que las fronteras son zonas de enlace cotidiano de una densa trama de intereses económicos, sociales y culturales” (Ramírez, 2004: 456). Por otra parte, las políticas de frontera en ambos países han sido desarrolladas desde un centro político-burocrático-tecnocrático -la capital- hacia la periferia que corresponde “a las zonas marginales, pobres, con pocas vías de comunicación, escasamente integradas al país y con poca presencia del Estado” (Buitrago, 2005).

Veamos qué se ha hecho en los últimos 5 años en la frontera colombo-ecuatoriana.

2.2. LA PERCEPCIÓN DE DESARROLLO PARA ECUADOR Y COLOMBIA: LA UDENOR Y EL FIP

ECUADOR

El gobierno del Ecuador, como estrategia de seguridad en la frontera con Colombia, identificó como una amenaza mayor a “la débil presencia institucional del Estado”. Más allá de la existencia de unidades militares y oficinas del gobierno central, se advirtió que la presencia del Estado como parte de la vida cotidiana de los habitantes de las provincias fronterizas es pobre, por lo que la política de seguridad propuso objetivos tales como “fortalecer la presencia del Estado de Derecho” e “impulsar la provisión estatal de bienes y servicios” (CO-SENA, 2002:1-3).

Por tal motivo el gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003) creó una unidad administrativa, dependiente de la Presidencia de la República, encargada de planificar, coordinar y ejecutar el desarrollo de la frontera: la Unidad de Desarrollo Norte (UDENOR).

La UDENOR es una agencia gubernamental ubicada en Quito, con oficinas en Tulcán, Lago Agrio y Esmeraldas. Concentra sus esfuerzos en coordinar acciones con otras agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y en buscar financiamiento interno e internacional (con mayor prioridad) para los proyectos de desarrollo en las provincias consideradas fronterizas: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Napo. Los proyectos de la UDENOR forman parte de un programa denominado “Programa de Desarrollo Preventivo Alternativo de la Región Fronteriza del Norte” (UDENOR, 2002: 4-5), cuyo objetivo primordial es

ofrecer alternativas económicas de empleo¹⁰ para los habitantes de la frontera (UDENOR, 2002: 5).

La UDENOR depende fuertemente de la asistencia financiera internacional (Coordinador de la UDENOR 2005). Durante el 2002, la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fueron claves para que la institución desarrollara su infraestructura física y capacidades operativas (UDENOR, 2002: 6). Esta dependencia aumenta en los años 2003 y 2004 al incluirse como donantes a la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Grupo Consultivo de Donantes (países europeos)¹¹ (UDENOR, 2004).

El proceso de toma de decisiones de la UDENOR se realiza en Quito de manera centralizada por medio de los comités de gestión “que están constituidos por funcionarios de alto nivel y con capacidad de decisión, delegados por cada una de las partes: el donante, el ejecutor, UDENOR, y los operadores técnicos -que están en contacto con la población- en los casos que sea necesario” (UDENOR, 2002: 10). Todo esto ha generado “una lógica vertical al haber un alto mando que toma las decisiones y una minoría del pueblo que puede opinar y votar [...] por lo tanto no se incluye a la población como participantes de los proyectos sino más bien como clientes” (Carvache, 2005).

Como resultado del Acuerdo de Cooperación entre la USAID y la OIM, el Programa fue establecido en el 2001 para las provincias fronterizas. Sus principales áreas de acción son: proyectos de infraestructura comunitaria y productiva, fortalecimiento de la sociedad civil y de gobiernos locales, así como asistencia a las comunidades

10 En este mismo informe se resalta que: “a los múltiples problemas internos que el Gobierno Nacional ha debido enfrentar, se añadió otro de carácter exógeno, que amenaza la estabilidad política, económica y social del Ecuador y que tiene su origen en los complejos problemas internos de violencia que operan en la hermana República de Colombia, cuyo territorio fronterizo con el Ecuador es escenario de actividades de narcotraficantes y de grupos irregulares armados, los cuales comprometen gravemente el desarrollo y la seguridad de la zona, y muy particularmente afectan a las poblaciones más pobres y vulnerables de las provincias del norte ecuatoriano, zonas que además, son ecológica y económicamente muy sensibles”. Informe Primer Año de Gestión UDENOR marzo 2001-marzo 2002, pp.5.

11 La UDENOR ha logrado convenios de cooperación por un monto de USD 266,4 millones, de los cuales el 50,18% son donaciones, y el 36,85% son créditos. El 28,45% de las donaciones corresponde a fuentes americanas y el 38,18% a la Comisión Europea. La totalidad de los créditos son concedidos por el BID. (Funcionario de la UDENOR, 2005).

receptoras, desplazados y refugiados como consecuencia del conflicto colombiano. Entre las obras principales financiadas por la USAID y ejecutadas por la OIM están: sistemas de agua potable, saneamiento, mejoramiento de caminos, puentes colgantes, puentes vehiculares, canales de riego, y embalses.

COLOMBIA

En el año 2000, se creó el Fondo de Inversión por la Paz (FIP). El mismo “define las características de los proyectos de desarrollo, los criterios de focalización y las prioridades en cuanto a áreas geográficas y líneas de acción” (Funcionaria del Programa de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia de la Presidencia de la República, 2005). Esta entidad entrega los recursos a las ONG operativas contratadas por el gobierno colombiano y ellas se encargan de ejecutar los proyectos directamente con los campesinos. La lista general de la entrega de la ayuda para el desarrollo en el sur de Colombia se concibe como una jerarquía que va desde el donante hasta el ejecutor:

- Sección Antinarcóticos del Departamento de Estado
- USAID
- Chemonics (compañía contratada para administrar programa)
- Agencia de Desarrollo Alternativo del gobierno colombiano(FIP)
- ONG operativa contratada por el gobierno colombiano
- Comunidades¹²

Entre los programas que funcionan en los departamentos de Nariño y Putumayo se encuentran:

- **Familias Guardabosques:** el programa vincula familias campesinas e indígenas como guardabosques brindándoles un apoyo económico y un acompañamiento social y técnico ambiental. Se desarrolla en zonas localizadas en ecosistemas estratégicos o áreas de conservación y protección, con presencia o en riesgo de ser afectadas por los cultivos ilícitos.
- **Proyectos Productivos:** es un programa de la Presidencia de la República, de carácter temporal, que se ejecuta en zonas focalizadas de cultivos ilícitos, mediante la gestión y apoyo a proyectos productivos agroforestales y agrícolas de mediano y largo plazo, sostenibles técnica, social, económica y ambientalmente. Se han empleado cultivos de yuca, maíz, palmito, banano y cacao.

12 Datos proporcionados por oficina del Plan Colombia de la Presidencia de la República de Colombia.

Para la USAID de Colombia la ayuda va hacia el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo alternativo, y los desplazados; el presupuesto para el año 2004 fue de USD 121 mil (USAID, 2004). Sólo en el departamento de Putumayo, la USAID ha invertido, durante el período entre septiembre de 2001 y el 2004, la suma de USD 45,3 millones, con el fin de impulsar la sustitución de cultivos de hoja de coca y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes¹³.

Para concluir, vale preguntarse si tienen Ecuador y Colombia políticas nacionales de desarrollo fronterizo. La respuesta para el primer país la da UDENOR, a través de sus obras desde septiembre del 2001 en las provincias fronterizas, acciones que no existieron con anterioridad; y en el caso colombiano la da el FIP, con sus obras de infraestructura que se están desarrollando desde el año 2000, como estrategia para reducir los cultivos de coca en todo el territorio nacional.

El desarrollo en la frontera aún no es visto como un eje para disuadir de las actividades ilícitas; más bien se han desarrollado proyectos de desarrollo cortoplacistas que no logran atravesar las fronteras para una verdadera integración regional. Esto hace pensar que la frontera todavía es vista como una división de territorios y no como integración a nivel comercial, político, cultural y social.

2.3. POLÍTICAS BINACIONALES DE SEGURIDAD FRONTERIZA

2.3.1. LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional con personería jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI)¹⁴. Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a 120 millones de habitantes en una superficie de 4.710.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Bruto Interno ascendía en el año 2002 a USD 260 mil millones (CAN, 2005).

13 Información proporcionada por Marcela Cevallos de CODHES, 31 de mayo de 2005 en Bogotá.

14 Compuesta por el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el Parlamento Andino, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), el Tribunal de Justicia, y la Secretaría General.

2.3.2. *ROL INSTITUCIONES BINACIONALES: CENAF, ZIF Y CADA*

La CAN define a los estados modernos como “entidades espaciales soberanas”, de ahí que la necesidad de establecer que “la cobertura territorial de dicha soberanía postule la linealidad, es decir el conocimiento preciso de los límites de esa porción de territorio dentro de los cuales el Estado ejerce su jurisdicción” (Oliveros, 2003:2). Por ello, aludir a la frontera en el contexto del desarrollo socio-económico implica, por un lado, reconocer la existencia de vínculos de una comunidad humana con otra que siendo vecina pertenece a otra jurisdicción nacional y, por otro, que sólo es dable percibir la frontera en la medida en que aquellos espacios situados en los confines de un Estado cuenten con una base demográfica. Así definida, la frontera siempre constituye una “frontera activa” (Oliveros, 2003: 3).

De esta manera se llega a la conclusión que la frontera es un concepto y una realidad compleja, pero que siempre constituye “un espacio de actuación compartida”, escenario de una densa trama de relaciones económicas, sociales y culturales (Oliveros, 2003: 3).

Dentro de la CAN existen convenios en materia de desarrollo con el fin de dar protección a las comunidades fronterizas y evitar así que se vinculen en actividades ilícitas. Los Centros Binacionales de Atención Fronteriza (CEBAF) son el conjunto de instalaciones que se localizan en una porción del territorio de uno o dos países miembros de la Comunidad Andina colindantes, aledaño a un paso de frontera, en donde se presta el servicio de control integrado del flujo de personas, equipajes, mercancías y vehículos, y se brinda servicios complementarios de facilitación y de atención al usuario¹⁵. Los Centros Nacionales de Atención de Fronteras (CENAF) están ubicados íntegramente en el territorio de un país, aledaño a un paso de frontera; o a un lado y otro, cercano al paso de frontera, es decir, unas instalaciones sobre el territorio de un país y otras sobre el del país limítrofe¹⁶.

Con Colombia y Ecuador, se han identificado las necesidades técnicas y de inversiones necesarias para hacer posible el funcionamiento del CEBAF¹⁷ yuxtapuesto en las adyacencias del puente de Rumichaca, sobre la base de los CENAF existentes de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador). La Cancillería de Colombia informó sobre su interés de integrarse a la infraestructura que se encuentra en construcción en el

15 Se debe construir un CEBAF a cada lado para evitar involucrarse en acciones de control colombianas en Ecuador. Revisar resolución andina 502. <<http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r502.htm>> Visitada el 3 de marzo de 2005.

16 Documento de Desarrollo Fronterizo de la Comunidad Andina de Naciones.

17 Visitar Página web CAN <<http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R668sg.htm>> Visitada el 3 de marzo de 2004.

CEBAF de San Miguel del lado ecuatoriano y ofreció, en reciprocidad, disponer de un área para la operación de las autoridades ecuatorianas en el CEBAF de Mataje, en el lado colombiano. Hasta enero del 2004 no se llegó a concretar nada (Izquierdo, 2005).

Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) son los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de los países miembros de la Comunidad Andina, en que se ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar su desarrollo de manera conjunta, compartida y coordinada¹⁸. Entre sus principales objetivos está el de diversificar y estabilizar los vínculos económicos, sociales, culturales, políticos e institucionales entre los países miembros; favorecer a las colectividades locales, eliminando los obstáculos que dificultan una potenciación de sus capacidades productivas, comerciales, culturales y de coexistencia pacífica¹⁹.

En documentos de las ZIF entre Ecuador y Colombia existen varios programas identificados con proyectos que apuntan hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada en las zonas de frontera:

- Programa Binacional de Integración Fronteriza (subprograma de generación eléctrica, manejo de recursos naturales binacionales, cooperación binacional en el área de salud, de infraestructura física binacional, comercio, turismo, entre otros).
- Programa Nacional de Desarrollo Económico (cultivo de tuna, plan de turismo, desarrollo rural, cultivo de quinua, producción de caracoles, entre otros).
- Programa Nacional de Gestión Ambiental (manejo de recursos naturales, entre otros).
- Programa Nacional de Desarrollo Social y Cultural (agua potable, unidad móvil de salud, entre otros).
- Programa Nacional de Infraestructura (mejoramiento de carreteras, ampliación del sistema alcantarillado, construcción del sistema de agua potable, entre otros)²⁰.

En el caso de Ecuador las obras han sido realizadas por la UDENOR, la OIM y el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). En cambio,

18 Página Web Comunidad Andina, Desarrollo Fronterizo, <<http://www.comunidadandina.org/fronterizo/zif.htm>>. Visitada el 2 de octubre de 2003.

19 Dato proporcionado por funcionario de la Subsecretaría de Soberanía Nacional y Desarrollo Fronterizo, 20 de abril de 2005.

20 Plan de Desarrollo de la ZIF ecuatoriano-colombiana, capítulo Ecuador, 2002. Información proporcionada por Oskar Izquierdo de la Dirección General de Relaciones Fronterizas con Colombia, 7 de mayo de 2005 en Quito.

en el lado colombiano no se pudo obtener información sobre la inversión social por parte del FIP, tan sólo un informativo sobre la reducción de los cultivos de hoja de coca por las fumigaciones²¹.

Con la decisión 549 de junio de 2003, de la CAN, se crea el Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA) con el fin de formular propuestas de estrategias subregionales en materia de desarrollo alternativo sostenible y prevenir acciones ilícitas, El objetivo es evitar la siembra y el traslado de los cultivos ilícitos de una zona o país a otro. A nivel binacional, la UDENOR de Ecuador y el FIP de Colombia, a través del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) de Colombia, trabajan en conjunto (Restrepo Uribe, 2005). Pero para funcionarios del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, dichos proyectos sólo están en papeles y no se han ejecutado “debido a que se ha dado mayor prioridad a las fumigaciones con glifosato en Putumayo y Nariño” (Piñas, 2005).

Para estudiosos de la frontera como Francisco Thoumi de la Universidad del Rosario y César Montúfar de la Universidad Andina, los gobiernos de Colombia y Ecuador no han visto a la frontera como una zona común, no existe una legislación similar que permita el desarrollo de proyectos productivos o posibilite la inversión en las regiones fronterizas, y en el departamento de Nariño, no ha sido posible implementar algo similar. A nivel binacional, el mayor esfuerzo se ha concentrado en la definición política de las ZIF y “no en su organización en torno a proyectos de desarrollo que generen dinámicas articuladoras” (Ardila, 2005).

2.4 ¿EXISTE UNA POLÍTICA BINACIONAL DE SEGURIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL?

En el caso de las cancillerías de Ecuador y Colombia, ambas identifican, promueven e incentivan proyectos que generen intereses comerciales, financieros, tecnológicos, culturales, educativos, turísticos, así como la cooperación mutua para lograr un efectivo desarrollo económico y social en la ZIF, que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones ecuatorianas y colombianas, con la participación de los gobiernos seccionales y de la sociedad civil organizada; aplicando para ello, en una y otra región fronteriza, los mismos programas, planes, proyectos, iniciativas, políticas y acciones, de acuerdo con las realidades propias de tales regiones (MRE, 2005). Pero, “todo queda hasta

21 De igual manera la totalidad de personas entrevistadas que manejan los temas de desarrollo y seguridad en la frontera desconocían las obras del FIP en Nariño y Putumayo. Todos confirmaban que el interés del Estado es en el aspecto militar/policial y en las fumigaciones.

allí, solo papeles, documentos y firmas” (El Tiempo, 2005), cuando se trata de ver la ejecución de las obras en la selva²².

En el caso de Ecuador y Colombia hay un sólo paso oficial fronterizo habilitado, que es el puente de Rumichaca en el Carchi, que facilita una serie de interacciones como parte “de una integración espontánea pero no como resultado de las medidas que hayan tomado los dos gobiernos centrales” (Presidente de la Cámara de Comercio del Carchi, 2005). El de San Miguel en Sucumbíos y Putumayo no entra aún en funcionamiento debido a que no hay carretera asfaltada en Colombia a pesar de haber sido inaugurada en varias ocasiones²³.

Los gobiernos tienen en cuenta sus fronteras sólo cuando “les plantean problemas de seguridad o dificultades comerciales” (Director del Diario *El Norte*, 2005) y la CAN no ha logrado ayudar a poner en marcha un marco permanente de articulación tanto entre los gobiernos centrales como entre las poblaciones fronterizas (Fescol, 2004:2).

Lo que da a entender que aún no se entiende que, desarrollo e integración fronteriza, son procesos que posibilitan la cooperación e interdependencia, por lo tanto deben reforzarse mutuamente. Colombia y Ecuador poseen una ZIF difusa que no logra articular ningún proyecto productivo y los problemas de seguridad dificultan su aplicación. Además, ha sido una demostración más que la integración ha sido concebida desde el centro de los dos países hacia su periferia, que en este caso son las fronteras.

De esta manera, la visión de la frontera como espacio donde predomina un criterio de “seguridad” depende, en buena medida, de la política de “securitización” implicada en el Plan Colombia ante la presencia de actores transnacionales involucrados en el mercado negro de armas, drogas, precursores químicos, delincuencia organizada, entre otros. A continuación veremos qué tan vulnerables son los moradores de la frontera norte del Ecuador y cómo es su situación social y económica.

CAPÍTULO III. PLAN COLOMBIA: EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS EN LA FRONTERA

3.1. DROGAS Y PLAN COLOMBIA

Desde la década del ochenta, Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan (1981-1989), declara al narcotráfico como una

22 En diciembre de 2004 un grupo de funcionarios de la Cancillería de Ecuador no quiso viajar a Puerto El Carmen de Putumayo por temor a ser secuestrados. Diario El Universo, sección fronteras, 22 de diciembre.

23 Su última inauguración fue a mediados del 2000 en los gobiernos de Andrés Pastrana y Gustavo Noboa.

amenaza a su seguridad nacional: “la combinación de la actividad guerrillera de izquierda con la industria del narcotráfico le agregó una enorme dimensión a lo que ya se percibía como una amenaza contra la seguridad”²⁴ (Randall, 1992: 289). Con el deseo de ganar la guerra a las drogas en los Estados Unidos el gobierno federal invirtió una suma de USD 4,3 billones anuales hasta 1988 (Bagley, 1991: 170).

Bajo la administración de George Bush –padre- (1989-1993) se efectuaron a nivel hemisférico consensos para la lucha contra el narcotráfico. En 1990 se celebra la cumbre de Cartagena, Colombia, con la participación de Colombia, Perú, Bolivia y EE.UU. en la que se aprueba la tesis boliviana de “Coca por Desarrollo”. En 1992 se celebra la Cumbre de San Antonio, Texas, en la que intervienen Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y México. En estos acuerdos los EE.UU. se comprometen a apoyar económicamente a los países latinoamericanos y proporcionar ayudas alternativas al cultivo de la coca cuando “se hayan destruido la mayor parte de las plantaciones y la entrada de la cocaína en EE.UU. haya desaparecido” (Clawson, 1998: 7).

Hacia 1994 el caso de Colombia “se convierte en una manifestación de la presencia de dinero del narcotráfico en las altas esferas del poder”²⁵ (Franco, 1997:39). Para la administración de Clinton (1993-1997), el presidente Ernesto Samper “fue elegido en forma democrática con la ayuda de cuantiosas contribuciones de los narcotraficantes” (Franco, 1997: 40). En la segunda administración de Clinton (1996-2000) se fortalece el discurso al “declarar la guerra en los países productores”²⁶ y, a la vez, se entiende a la reducción de los cultivos como condición indispensable para la paz y la estabilidad en la región.

Ante la “preocupación del aumento de la producción y tráfico de drogas, el incremento de la violencia guerrillera y paramilitar y el deterioro de las condiciones políticas y económicas de Colombia” (Ba-

24 Se conoce que Washington otorgó ayuda militar de helicópteros en la década de los 60, “a pesar que aún las autoridades norteamericanas no creían que unos millares de guerrilleros armados y entrenados constituyeran una amenaza constitutiva para los gobiernos colombianos”. Ver: Joseph Tulchin, 1997; “El Narcotráfico y la Seguridad Hemisférica”, en: *Narcotráfico y Seguridad en América Latina*, # 15. Washington D.C.

25 “Hasta antes del fin de la Guerra fría el principal interés de los Estados Unidos en la región era la contención al comunismo cubano-soviético, por lo que la corrupción como producto del narcotráfico en los gobiernos colombianos no era tomada muy en cuenta”

26 Ver: *2000 National Security Strategy for a Global Age*, The White House, December . Visitada el 4 de marzo de 2005 <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nss/nss_dec2000_contents.htm>

gley, 2001: 24), en 1998, Washington opta por “certificar a Colombia como país cooperador en la guerra estadounidense contra las drogas” (Bagley, 2001: 25). Las relaciones Clinton-Pastrana se fortalecen para contener el tráfico de drogas ante la “incapacidad del Ejército colombiano de asegurar sus fronteras” (Bagley, 2001: 24), pues los grupos guerrilleros y de narcotraficantes se han convertido en “actores transnacionales más allá del control efectivo de Bogotá” (Bagley, 2002: 25).

La lucha antidrogas de la administración del presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) se dio con el “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” cuya intención fue erradicar y suplantar los cultivos de coca, marihuana y amapola por cultivos lícitos, y buscar una salida negociada al conflicto²⁷. Para esto Pastrana tuvo que buscar el apoyo de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos. Pastrana lo presentó ante la Casa Blanca a mediados de 1998 como su “Plan Marshall” que consistía en un “paquete de ayuda social y económica para las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado colombiano” (Duro, 2002: 98). El gobierno de Bill Clinton se mostró muy desconfiado de la propuesta de Pastrana al “no haber un plan sólido para la erradicación de los cultivos ni para contrarrestar a la guerrilla”²⁸ (Isacson, 2001: 5). De esta forma las relaciones bilaterales se “narcotizaron” y la paz pasó “a un segundo plano” (Isacson, 2001:6).

Además, Washington reconoce “el vínculo entre el negocio del narcotráfico y el conflicto armado colombiano” (DE-EUA, 2000). Con la visita de Clinton a la ciudad caribeña de Cartagena el 30 de agosto del 2000, se dio el apoyo definitivo a la marcha del plan antinarcóticos, como resultado, Colombia recibió una ayuda de 1.300 millones de dólares (DE-EUA, 2001).

3.2. BREVES RASGOS DEL PRESUPUESTO PARA EL PLAN COLOMBIA Y SU REGIONALIZACIÓN

A pesar de que las autoridades gubernamentales de Bogotá insistieron en que el Plan Colombia tiene un contenido más social que militar, se ha podido evidenciar que “el 80% de los montos de la ayuda norteamericana se destina a modernizar y reestructurar a las Fuerzas Militares y Policía para hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico” (Duro, 2002: 99) ante la creencia de que las Fuerzas colombianas “son

27 La cual involucra a una diversidad de actores entre guerrilleros de las FARC y ELN, grupos paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes.

28 En 1999 tres indigenistas norteamericanos mueren asesinados por las FARC en la zona de Arauca.

incapaces de responder a los desafíos del país”²⁹ (Duro, 2002: 100)). La descripción de la ayuda es la siguiente:

- 416 millones para asistencia militar, que incluye entrenamiento y equipamiento a batallones antinarcóticos, compra de helicópteros *Blackhawks*, protección de bases de inteligencia y obras de infraestructura.
- 378 millones para apoyar medidas de interdicción: radares, pistas de aterrizajes, nuevas aeronaves y operaciones navales.
- 115 millones de ayuda a la policía colombiana para financiar compra de armas, helicópteros *Blackhawks*, construcción de bases antinarcóticos, aeronaves de fumigación, entrenamiento, actividades de erradicación, entre otros.
- 64 millones para el desarrollo alternativo: programas ambientales y erradicación voluntaria de cultivos ilegales en el sur de Colombia.
- 37 millones para apoyar programas de asistencia a los desplazados.
- 51 millones para el apoyo a los derechos humanos.
- 13 millones para la reforma del sistema judicial.
- 55 millones para el fortalecimiento del “Estado de Derecho”.
- 3 millones para el proceso de paz³⁰.

El total de la ayuda estadounidense incluye el préstamo sin costo de mantenimiento y funcionamiento de casi 90 helicópteros *BlackHawk* (Uh-60) y *Huey* (UH-1). Cada helicóptero vale aproximadamente quince millones de dólares, además de la ayuda para mantener 72 helicópteros del Ejército y 66 de la Policía³¹. Equipos de fuerzas especiales estadounidenses del Comando Sur han capacitado a 30 mil soldados y policías en tareas de infantería ligera y en labores de inteligencia³² (Policía Nacional de Colombia, 2005: 23).

Se conoce que la región sur de Colombia, comprendida por los departamentos que limitan con el Ecuador, Nariño y Putumayo, concentra la mayor extensión de cultivos de coca del país, por eso la “Arrinco-

29 Palabras del jefe del Comando Sur Charles Wilhelm. Visitada el 14 de enero de 2005. <www.usinfo.state.gov>

30 Ver: *El Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia*, Embajada de los Estados Unidos, Sección Noticias, Hoja Informativa del Departamento de Estado, 3 de febrero de 2003.

31 Especial Plan Patriota, *diario El Tiempo*, 4 mayo de 2005. <www.eltiempo.com.co>

32 Datos proporcionados por la página web de la Policía Nacional de Colombia en su página web Visitada el 13 de mayo de 2005<www.policia.gov.co>

namiento hacia el Sur” (*Push into the Southern*) (Isacson, 2001: 9) fue la primera fase del Plan Colombia. Además, la zona del Putumayo es una de las zonas con mayor presencia del grupo insurgente de las FARC.

De esta manera, los principales recursos del país se destinan para el gasto militar y al pago de los compromisos financieros internacionales³³, con lo cual se limitan las posibilidades de reactivación económica y se posterga la solución de los problemas sociales que aquejan al país. Entre tanto la política exterior “se subordina cada vez más a las prioridades e intereses de Washington y su agenda unilateral de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” (Leal, 2004: 3). Sumado a esto puede apreciarse que la asistencia militar que otorga la Casa Blanca a Colombia, “reemplaza la cooperación multilateral para buscar soluciones políticas a la confrontación armada” (CODHES, 2005).

En la primera administración del mandatario norteamericano, George Bush (2001-2005), se plantea la Iniciativa Regional Andina (IRA) con la intención de regionalizar la lucha antinarcóticos en las naciones fronterizas con Colombia (incluidos Panamá y Brasil). Con la IRA se contemplan 292 millones para cada nación, además de 223 millones de los 1.319 millones provenientes del Plan Colombia. En el caso de Ecuador, en esos años recibe 37 millones de dólares³⁴ de ayuda. De esta manera, la IRA refuerza al Plan Colombia, afianzando una visión que concentra la represión del negocio de las drogas en las áreas del cultivo, procesamiento y tráfico.

En la era posterior a los atentados en Nueva York y Washington D.C. del 11 de septiembre, la estrategia de la Casa Blanca cambia hacia la lucha global contra el terrorismo, “de tal manera que se relaciona a la guerrilla colombiana con el narcotráfico para poder financiar sus actos violentos” (Bustamante, 2004: 2), catalogando a las guerrillas de “narcoterroristas”, lo que implica que “no se puede negociar con ellas” (Bustamante, 2004: 3).

Al llegar a la presidencia de Colombia el actual mandatario, Álvaro Uribe, la visión de seguridad interna toma un giro más radical “en el reforzamiento militar del Estado que en el diálogo con los grupos armados” (Buitrago, 2005.). Así la estrategia de seguridad del gobierno colombiano se asocia a la de los Estados Unidos al establecer como principal amenaza el terrorismo de las FARC, el ELN y de la AUC³⁵.

33 Como ha sido la firma de las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los cuatro últimos gobiernos y el pago de la deuda externa.

34 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “La Iniciativa Regional Andina”, Visitada el 3 de enero de 2005 <<http://usinfo.state.gov/español/ari/01042101.htm>>.

35 Gobierno Nacional de Colombia, 2003, “Política de Seguridad Democrática”, Sección Amenazas

En la frontera sur colombiana limitan con el Ecuador los departamentos de Putumayo y Nariño, sitios estratégicos³⁶ de las guerrillas de las FARC, el ELN y los paramilitares de las AUC (Oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 2005). La guerrilla se instaló en la zona a mediados de los años 80, y el frente 32 es el más importante, aunque también existen los frentes 2 y 48 (El Tiempo, 2003). La presencia de los paramilitares es para cortar la fuente de financiación de las FARC e impedirle que aproveche la situación fronteriza para el tráfico de armas, municiones, explosivos e insumos (*El Comercio*, 2004).

En términos militares la guerrilla colombiana se conforma del Bloque³⁷ que representa a una división y el Frente³⁸ a una brigada. Las FARC cuentan con siete bloques y cada bloque tiene cerca de 15 frentes y una columna móvil³⁹, que es su principal fuerza de combate⁴⁰. Se calcula que hay unos 15.000 hombres.

El ELN cuenta con dos frentes de guerra y ocho áreas estratégicas compuestas por cuarenta y un frentes rurales y ocho frentes urbanos. Se calcula que hay: 7.000 personas en armas.

Las AUC⁴¹, cuentan con cerca de un millar de hombres organizados en trece Columnas móviles. La columna del Caquetá y Putumayo se encuentran en los departamentos colindantes con el Ecuador.

A mediados del 2003 se empieza a ejecutar el denominado “Plan Patriota” que supone el traslado de 15.000 efectivos a las regiones ocupadas por la guerrilla, en especial las FARC en los departamentos de Caquetá y Putumayo. La intención es empujar y golpear a los insurgentes hacia el sur, mediante acciones móviles, con fuerte respaldo

36 Estos grupos no son de combate sino más bien su rol es logístico: obtener de la frontera vestimenta, armas, comida, medicamentos, precursores, etc.

37 Se llama Bloque de Frente cuando consta de más de cinco Frentes en un área determinada y tiene su propio Estado Mayor de Bloque. Los Bloques están compuestos por Frentes, Compañías y Columnas. Cuando cuenta con menos, recibe el nombre de Comando Conjunto. Hay siete Bloques: Caribe, Oriental, Magdalena Medio, Occidental, Central, Córdoba y Sur. Información dada por oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador (COMACO) el 15 de febrero de 2005.

38 Unidad compuesta por más de noventa y seis efectivos. Actualmente las FARC tienen aproximadamente sesenta Frentes rurales y urbanos que operan en cerca de quinientos municipios del país. Existe también el Frente Internacional.

39 Grupo de noventa y seis guerrilleros. Está formada por dos Compañías.

40 Luego viene la compañía formada por 48 guerrilleros agrupados en dos guerrillas. La guerrilla formada por 24 efectivos agrupados en dos escuadras. La Escuadra que está conformada por 12 efectivos agrupados en dos Unidades Tácticas de Combate (UTC), las cuales están formadas de 3 a 6 hombres cada una.

41 Organización nacional armada e irregular que se opone a la guerrilla y a quienes consideran su base social.

aéreo y de inteligencia⁴². Lo que se busca es recuperar cada río, cada montaña, cada pueblo para complicarle a la guerrilla el establecimiento, los desplazamientos, las comunicaciones y, sobre todo, golpear su red financiera (Revista Semana, 2004).

Además hay que resaltar que en estos sectores se han creado “nuevos batallones, brigadas y unidades antinarcóticos; avanzan programas de soldados rurales; crece la red de informantes, hay bombardeos, detenciones masivas y fumigaciones” (De La Vega, 2004: 4).

3.3. LAS FUMIGACIONES: EFECTOS Y REDUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA FRONTERA

A pesar de que las fumigaciones con glifosato se realizan en territorio colombiano, por acción de los vientos afectan, no sólo los cultivos lícitos en la zona ecuatoriana, sino también la salud de los campesinos, quienes sufren afecciones a los ojos y garganta, erupciones cutáneas, dolores de cabeza, enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias (*Día a Día*, 2004).

Un estudio realizado por Acción Ecológica en el 2001, “Impacto de las fumigaciones del Plan Colombia en la frontera colombiana”, basado en muestras realizadas en poblaciones fronterizas localizadas en la rivera del río San Miguel -Aguas Blancas, la Pedregosa, Nueva Granada y los Cristales en Colombia; Chone 2 y Puerto Nuevo en Ecuador- concluye que las fumigaciones “han generado impactos en la salud, los cultivos y la forma de vida de los habitantes de la región”⁴³. De igual forma se señala que no se ha cumplido “la no fumigación en un perímetro de 8 a 10 kilómetros del río San Miguel dentro del territorio colombiano”⁴⁴.

Según el estudio de Acción Ecológica, el pesticida utilizado, glifosato potenciado con los coadyuvantes POEA y Cosmo Flux 411F⁴⁵ (que multiplican los efectos del primero) tiene un impacto severo en la población, ganado y cosechas de Sucumbíos.

Tanto en las zonas de Ecuador como de Colombia entre las hectáreas de cultivos legales afectados en la zona frontera se encuentra el

42 Además se duplicará el número de militares norteamericanos que se pueden enviar a Colombia—de 400 antes permitidos a 800—y aumentar también el de contratistas privados en un 50%, es decir de 400 a 600. Plan Patriota busca a las FARC en la mesa de negociación, *Diario El Tiempo*, visitada 23 de junio de 2004, <www.eltiempo.com.co>

43 Documento proporcionado por Acción Ecológica.

44 Ver documento: Bigwood, Jeremy, 2002; “Breve Resumen de la Literatura Científica con respecto a los efectos nocivos de formulaciones que contienen Glifosato en Biotas Acuáticas y Suelos”, Acción Ecológica, 6 de marzo, Quito.

45 La intención según los expertos es que el químico se quede en la hoja para deteriorarla y matarla.

café, caña plátanos, arroz, maíz, cacao, yuca⁴⁶. Además de provocar en las personas comezón, ampollas, problemas respiratorios, dermatológicos y digestivos se ha conocido también los casos de abortos y malformaciones en mujeres embarazadas⁴⁷. Cabe mencionar que el gobierno colombiano “no califica como desplazados a las víctimas de las fumigaciones del Glifosato ya que no se lo considera dañino para la salud”⁴⁸.

Dentro de los resultados de las fumigaciones en las áreas con sembríos de hoja de coca, el informe del World Drug Report 2004 de la Oficina de Crimen y Drogas de Naciones Unidas (UNODC), dice que Colombia para finales del 2003 tuvo la mitad de la coca que tenía hace tres años: de 163 mil hectáreas en diciembre del año 2000, se pasó a 86.300. Putumayo que llegó a tener 66 mil hectáreas, para inicios del año 2004 tenía menos de 8 mil. Por otra parte en un reportaje del diario *El Tiempo* se demuestra la complejidad del asunto al demostrar que “la reducción nacional casi se explica por la erradicación de unas 67 mil hectáreas en el eje Putumayo-Caquetá, pero Nariño se disparó: pese a que desde el año 2000 se han fumigado allí 70 mil hectáreas, los cultivos han duplicado la superficie”⁴⁹.

Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá son los departamentos que colindan con Ecuador, a continuación, una descripción de la reducción de los cultivos desde el año 1999 hasta el 2004. Como se podrá observar mientras hubo una reducción de los cultivos en tres departamentos, en Nariño hubo un gran aumento:

Cuadro 2
Cultivos de Hoja de Coca

Departamento	Mar. 99	Ago. 2000	Nov. 2001	Dic. 2002	Dic. 2003	Dic. 2004
Nariño	3.959 h	9.343 h	7.494 h	15.131 h	17.628 h	14.154 h
Putumayo	58.297 h	66.022 h	47.120 h	13.725 h	7.559 h	4.386 h
Caquetá	23.718 h	26.603 h	14.516 h	8.412 h	7.230 h	6.500 h
Cauca	6.291 h	4576 h	3.139 h	2.120 h	1.443 h	1.266 h

Fuente: UNODC, Censo de cultivos de coca 2004, 2005: 1.

46 Ver documento: Bravo, Elizabeth, 2000, *Del Otro lado de la Frontera: impacto en el medio ambiente del Ecuador y la región del posible uso de armas biológicas*, Acción Ecológica, Quito. Ponencia presentada en el Encuentro Internacional sobre uso de armas biológicas en la guerra contra las drogas. 10 y 11 de octubre 2000. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito – Ecuador <www.accionecologica.org>

47 “Frontera norte se queja de impactos en las aspersiones”, en *Diario El Universo*, Guayaquil, marzo 2 2004.

48 “Más bien lo que perjudica a la salud de la gente son los químicos empleados para el procesamiento de la hoja de coca en cocaína...de eso no hablan las ONG”, dice Victoria Eugenia Restrepo Uribe de la Presidencia de la República de Colombia, 31 de mayo de 2005.

49 “En tres años se redujo el área de cultivos ilícitos a la mitad en Colombia”, según reporte de la ONU, en *Diario El Tiempo*, Bogota, 25 de junio de 2004.

El mismo artículo de prensa de *El Tiempo* señala que “las áreas de cultivos ilícitos tienen niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas más altos que la media nacional [...] y muchas de ellas coinciden con los mayores índices de población desplazada”. Pese a la notoria reducción, el mismo reporte de la UNODC sostiene que “como el tamaño de los cultivos ha venido desminuyendo y la aplastante mayoría esta en lotes de menos de 3 hectáreas, hoy habría más familias cultivando que en años anteriores”. Además, analiza los posibles nexos entre los cultivos de coca y la pobreza, las personas internamente desplazadas y la presencia de grupos armados ilegales. Aunque ninguno de ellos parece ser un factor decisivo por sí mismo, es una realidad que estos factores crean un terreno fértil para que los cultivos de coca proliferen en Colombia.

Varias razones explican que todavía existan los cultivos de coca en la zona: “aumento de la capacidad de resiembra de los cultivadores, expansión a nuevas zonas, mayor densidad de plantas por hectárea, la nueva variedad de coca resistente a las fumigaciones y nuevas especies con mayor productividad” (Thoumi, 2005).

A lo anterior hay que sumar las grandes violaciones a los derechos humanos por parte de la guerrillas y los paramilitares como: “las masacres, los ataques militares indiscriminados, los paros armados, los bloqueos alimentarios, el confinamiento, las masacres y asesinatos colectivos, el minado de campos, el saqueo de bienes de comunidades y el reclutamiento forzado” (CODHES, 2005) lo que ha generado que centenares de familias migren a otros departamentos y a las zonas fronterizas para buscar refugio.

3.4. MIGRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

El departamento colombiano del Putumayo se caracteriza por ser una de las regiones donde el Estado no ha tenido mucha presencia. Frente a la situación del conflicto armado se ha reducido el presupuesto destinado a la educación y a la salud, además de aumentar el desempleo y la quiebra del sector agrario por las medidas neoliberales adoptadas por los gobiernos de César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006). Es así que la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en base en un cálculo de comportamiento de distintas variables de tipo social (cobertura en educación, salud, servicios básicos, energía y Necesidades Básicas Insatisfechas), califica al Putumayo como el tercer departamento menos desarrollado después de Chocó y Guaviare, con un índice de desarrollo de 36,15, sobre un promedio nacional de 54,77 (Ceballos, 2002: 34).

El investigador Paul Collier en un informe presentado al Banco Mundial⁵⁰ dice que “cuando un gobierno reconocido ejerce dominio sobre todo el país, la efectividad de la legislación contra los cultivos ilícitos es muy alta. En cambio, cuando este dominio no es pleno aumenta la probabilidad de cultivos ya que éstos requieren de un territorio fuera del control de las autoridades reconocidas”. Esto da a entender que además de haber pobreza, desigualdad o crisis rural en determinadas zonas “ante la ausencia de reglas estables, previsibles y universalmente acatadas surge una pluralidad de reglas usadas, interpretadas o reivindicadas según la particular conveniencia de cada grupo o individuo, lo cual aumenta el grado de incertidumbre y la desconfianza hacia los demás” (PNUD, 2003: 307). Tal ha sido el caso de los departamentos del sur en donde la presencia del Estado no rige, pero sí la de los diversos actores involucrados en el conflicto interno colombiano.

Bajo esta coyuntura, el mercado de la coca ofrece varias ventajas sobre los cultivos tradicionales, como el pago al contado, un alto margen de rentabilidad, garantía de mercadeo y el no requerimiento de fletes de transporte. Así, el modelo económico en los últimos años se ha basado en su mayor parte en el cultivo, explotación y comercialización ilegal de hoja de coca⁵¹. Con las fumigaciones, el Putumayo queda prácticamente en un colapso en cuanto a la producción.

El Putumayo se ha caracterizado por ser “expulsor y receptor” de población; debido a que recibe desplazados provenientes de otros departamentos vecinos como Nariño, Caquetá y Cauca. A la vez, expulsa de manera permanente población hacia el Ecuador, en especial a las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Se conoce que “los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís son los principales expulsores de población hacia Sucumbíos” (Ahumada, 2004: 122).

En el caso de Ecuador la embajada colombiana considera que hay alrededor de unos 8 mil refugiados y 250 mil desplazados (Funcionario del consulado colombiano, 2005), pero de esta última cifra apenas el 5% llega a solicitar refugio y el 1% lo consigue⁵². Para la cancillería del Ecuador el número de refugiados colombianos en el Ecuador asciende a 7.790 (reconocidos entre el 2000-2004)⁵³.

50 “Guerra Civil y Drogas”, Policy Research Report, World Bank Group. Visitada el 12 de febrero de 2005. www.econ.worldbank.org

51 Ver: “Construcción de una visión estratégica del desarrollo del Putumayo” documento de trabajo: Planeación Departamental e Instituto de Derechos Humanos, Universidad Javeriana, Bogotá.

52 Dato proporcionado por la fundación Codhes, informativo del 3 de enero de 2004.

53 Dato proporcionado por funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el 15 de septiembre de 2004.

Cuadro 3
Puntos de ingreso de desplazados colombianos al Ecuador

Pueblo	Provincia
Rumichaca	Carchi
Puente San Miguel	Sucumbíos
Mataje	Esmeraldas
San Lorenzo	Esmeraldas
Palma Real	Esmeraldas
Ancón de Sardinias	Esmeraldas

Fuente: Elaboración propia según datos de entrevistas.

Al llegar al Ecuador los desplazados se encuentran en la costa y oriente con poblaciones abandonadas por el Estado en cuanto a infraestructura de desarrollo social; lo que se ha reflejado en un incremento del número de habitantes, en ciudades como San Lorenzo, en Esmeraldas, y Lago Agrio, en Sucumbíos, que no reciben suficientes servicios de agua, luz, alcantarillado y vivienda.

La presencia de colombianos en las zonas de frontera de Ecuador no es ninguna novedad, ha sido algo común el movimiento de colombianos y ecuatorianos al otro lado de la frontera. Lo que no ha sido común es el masivo ingreso de colombianos desplazados que buscan refugio en el Ecuador. Este panorama se da a partir de mediados del año 2000 con el “paro armado”⁵⁴ de las FARC que generó la salida masiva de campesinos colombianos del Putumayo, y como resultado, el registro, como refugiados provisionales en la ciudad fronteriza ecuatoriana de Lago Agrio, de 1.100 personas⁵⁵.

Las zonas de frontera han sido el epicentro sensible de la expansión del conflicto armado y profundización de la crisis humanitaria. “Más del 10% del total de la población está en situación de desplazamiento, es decir 29.984 personas, se ubicaron en los municipios fronterizos” (CODHES, 2005: 3). En el caso de Ecuador, en el 2003 hubo 11.463 solicitudes de asilo, mientras que en el 2004 fue de 7.853 de las cuales 2.416 fueron reconocidos (CODHES, 2005)⁵⁶. Se conoce que, en total, Ecuador ha recibido 27.851 solicitudes de refugio desde el 2000 hasta septiembre del 2004, de

54 Consiste en bloquear las carreteras y boicotear agua, luz y teléfono a las poblaciones aledañas.

55 Ver documento: “Refugiados Colombianos en Lago Agrio 2000-2001” del Servicio Jesuita a Refugiados, SJR-Ecuador.

56 A Septiembre de 2004. Datos proporcionados por ACNUR.

ellas tan sólo 7.790 personas han sido reconocidas como refugiados (ACNUR, 2004).

Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos (FORCOFES) comenta que la principal causa para el desplazamiento de colombianos no es la violencia sino más bien “las fumigaciones [...] la gente ha salido masivamente de su territorio porque se ha quedado sin trabajo, ya no hay mucho que hacer allá en Colombia, los cultivos fueron devastados, ahora la tierra ha quedado estéril, ya no produce, no hay que cosechar, el maíz, el guineo, el arroz, todo pereció” (Alarcón, 2005).

De igual manera el padre Miguel Gutiérrez de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS) argumenta que “el campesino pobre que no tiene recursos para internarse en el país [...] acá están los campesinos pobres, que llegan con lo justo y no pueden movilizarse porque no tienen dinero. Los que tienen plata se van para Quito, Ibarra, Guayaquil y Santo Domingo de los Colorados” (Gutiérrez, 2005).

La respuesta del Ecuador, al igual que el resto de naciones vecinas, al tema de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes indocumentados, ha estado caracterizada por el cierre de fronteras en el marco de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico que implica:

- a. Militarización de la línea fronteriza, en la que hay 6.000 hombres a lo largo de las tres provincias⁵⁷;
- b. Estrategias de contención del conflicto mediante controles a las migraciones (pasado judicial⁵⁸ en el caso del Ecuador desde el 1 de mayo del 2004)⁵⁹.

A nivel político-militar, el ministro de defensa del Ecuador, Solón Espinosa –hasta el 19 de agosto del 2004–, manifestó que la prio-

57 Tanto militares como policías revisan documentos, bolsos o equipajes para comprobar que no se pase armamento o droga al otro lado de la frontera. En los puentes de Rumichaca y San Miguel, y en las embarcaciones de los manglares de San Lorenzo los patrullajes de policías y militares son muy constantes. Dentro de la política de Seguridad y Defensa Nacional los principales efectos dentro del Plan Colombia están el tráfico de armas, el narcotráfico y las actividades violentas.

58 “Es un documento que otorga el Estado colombiano a sus ciudadanos que desean ir a otro país. Su fin es el de dar a conocer a las autoridades extranjeras si el ciudadano tiene o no delitos o deudas con la justicia colombiana”. Funcionario de la Embajada de Colombia en Ecuador.

59 “Frontera Militarizada”, *Diario El Universo*, 17 de mayo de 2004.

ridad de las fuerzas del orden en la frontera está en controlar la presencia de narcotraficantes, grupos insurgentes y delincuencia organizada⁶⁰; mientras que a nivel diplomático el canciller, Antonio Parra Gil, critica el poco respaldo de Bogotá para ayudar a los desplazados que llegan al Ecuador. “[...] son refugiados que llegan al país como consecuencia del carácter social y político que atraviesa Colombia, y Colombia debe cooperar en la solución de los problemas de sus ciudadanos, a los que se acoge con los brazos abiertos” (El Espectador, 2005). Frente a las acciones armadas entre las FARC y el ejército colombiano, a finales de junio de 2005⁶¹, el canciller ecuatoriano ha exigido la visa para todo ciudadano colombiano que ingrese al Ecuador, causando preocupación en Bogotá (El Comercio, 2005).

Así, en los pueblos fronterizos, los desplazados colombianos en el Ecuador se ven afectados por una doble exclusión:

1. Resulta de su condición de desplazados, que se ven forzados a abandonar su hogar, su lugar de origen y el territorio de su nación, para establecerse en un país vecino.
2. La región receptora que es el caso las provincias fronterizas ecuatorianas, tiene una situación socioeconómica más difícil que la del lugar de procedencia de los desplazados, aspecto que será revisado a continuación.

3.5. SITUACIÓN SOCIAL EN LA FRONTERA

La frontera colombo ecuatoriana tiene una extensión de 600 Km, y va desde el Océano Pacífico, pasando por la cordillera de los Andes, hasta el oriente amazónico. Las provincias fronterizas son: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

A continuación se describirá la situación social de las tres provincias para entender su vulnerabilidad. Cabe destacar que según indicadores de NBI, un hogar es pobre cuando se hacen presentes graves carencias en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. La línea de pobreza es el costo estimado de una canasta de bienes y servicios que satisface las

60 “El objetivo es contrarrestar los efectos del conflicto colombiano, ejercer soberanía y patrullajes para detectar bases clandestinas, actividades ilícitas y sitios de abastecimiento para la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al otro lado” (Oficial del Comando Conjunto, 2005).

61 El alcalde del recinto colombiano Puerto de Asís, Jorge Coral, manifestó en una entrevista radial que los guerrilleros de las FARC utilizan al Ecuador para refugiarse, abastecerse y planear atentados. “Ecuador es un refugio recurrente de las FARC”, *diario El País*, Bogotá. 28 de junio de 2005

necesidades básicas de una persona durante una quincena. El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) considera los siguientes puntos dentro del NBI:

- Educación;
- Salud;
- Vida Cotidiana y Empleo;
- Vivienda;
- Infraestructura social; y,
- Ciudadanía⁶².

También se analizará cómo el índice de pobreza en los cantones de estudio puede profundizar la destrucción del tejido social y que los moradores puedan ser partícipes de actividades ilegales para poder subsistir.

Con estos elementos se analizará el contexto de la zona norte del país.

Cuadro 4
Necesidades Básicas Insatisfechas en la Frontera Norte

Indicador	Ecuador	Esmeraldas	Carchi	Sucumbíos
Población Total	12.156.608	385.223	152.939	128.995
Población colombiana	51.556	3.562	6.977	4.304
Habitán en casa, villa o apartamento	81,80%	80,30%	79,20%	72,90%
Sistema de agua potable y saneamiento	82,70%	71,60%	83,30%	60,40%
Servicio eléctrico	89,70%	75,60%	94,30%	64,80%
Servicio Telefónico	32,20%	22,30%	30,50%	10,60%
Tasa de analfabetismo	9,00%	11,60%	7,20%	8,50%
Escolaridad	7,3%	6,20%	6,30%	6,00%
Pobreza por NBI	61,30%	76,00%	59,60%	81,70%

Fuente: SIISE, versión 3.5 y datos INEC VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2001.

El cuadro anterior da a entender que las provincias de la costa sierra y amazonía son muy diferentes entre sí a nivel social. Mientras Carchi, que tiene un nivel alto de presencia de colombianos, posee buenos servicios para sus habitantes, Esmeraldas y Sucumbíos requieren de mayor atención en infraestructura eléctrica, de agua potable y educativa.

62 Versión 3.0 del SIISE. Cd rom

3.5.1. Carchi

Educación

En el cantón de Tulcán hay 19 centros educativos en el sector urbano y 22 en la zona rural⁶³.

Para el jefe político de Tufiño, la educación en la zona “no es tan buena por los malos pagos a los profesores; por lo tanto, no es un buen negocio educar en la actualidad”; por ejemplo, en San Marcos y Tobar Donoso se ve un alto índice de analfabetismo debido a la falta de profesores que debieron irse de la zona por la crisis económica (efectos de la dolarización), según el prefecto Rene Yandún⁶⁴.

El alcalde de Tulcán, Pedro Velasco, ha denunciado en varias ocasiones que “la seguridad se ve sólo desde una perspectiva en el incremento del gasto militar y no desde el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes” (Alcalde de Tulcán, 2004). Eso es notorio en la parroquia Maldonado “donde la población demoró 17 años en construir la infraestructura del colegio”; mientras que los militares “en menos de un año construyeron el destacamento junto al centro educativo y pusieron hasta televisión satelital [...] Es una contradicción que refleja las prioridades del Estado” (El Comercio, 2005).

Salud

La mayoría de entrevistados se mostraron satisfechos con los servicios de salud que presta la ciudad de Tulcán. En el caso de los moradores de Tufiño, Chical y Maldonado deben viajar a la capital de la provincia para hacerse operar debido a que los centros de salud no cuentan con la estructura necesaria; sólo pueden brindar medicamentos, recetas y remedios⁶⁵.

A simple vista, al llegar a los pueblos fronterizos, parecería que todos están preparados para enfrentar un escenario de guerra, pero la realidad es otra. La capacidad de atención en emergencias es limitada. Marcela Charfuelán, encargada del subcentro de salud de El Chical comenta que el 60% de los pacientes son colombianos y que en caso de una emergencia no podría atender a más de 20 personas. “A las personas que llegan con heridas de gravedad les enviamos a Tulcán por que aquí no hay equipos para radiografías y ecos, eso limita mucho nuestro trabajo”⁶⁶.

63 Dato proporcionado por el presidente de la Unión Nacional de Educadores del Carchi el 22 de marzo de 2005.

64 Yandún, 2004.

65 Moradores de Tufiño, Chical y Maldonado, 2005.

66 Charfuelán, 2005.

Cuadro 5
Vivienda

Detalle	Porcentaje
Servicio de agua	55,04%
Servicio de luz eléctrica	94,33%
Servicio de eliminación de basura por carro	59,56%
Servicio de eliminación de aguas servidas	67,36%
Servicio higiénico	37,30%
Viviendas con hacinamiento	24,50%

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda, 2001

Más de la mitad de la población cuenta con agua, pero cabe destacar que en las ciudades de Tulcán y Tufiño se recibe agua potable y en el resto de pueblos el agua es entubada gracias al apoyo de la UDENOR-USAID-OIM. La luz eléctrica está presente en todas las poblaciones y también en las carreteras. La mayor parte de las poblaciones tienen servicios de eliminación de basura y de aguas servidas, pero por lo general se lo desecha a los ríos cercanos por medio de tuberías o alcantarillas. En el caso de las poblaciones pequeñas como San Marcos hay servicios higiénicos públicos pero muchas veces el servicio no es bueno debido a que la gente no cuida los inodoros. En cuanto a las situaciones de hacinamiento, son comunes en el campo⁶⁷.

Infraestructura social

En el cantón Tulcán, el 68,3% de la población goza de red de alcantarillado⁶⁸. Las poblaciones limítrofes de Tufiño, Chical, Maldonado y Tobar Donoso⁶⁹ gozan de agua (no potable sino entubada) gracias a los proyectos de desarrollo de la UDENOR-USAID y OIM. La carretera de Tulcán-Tufiño es pavimentada pero la ruta Tufiño-Maldonado-Chical no lo es. A estas dos poblaciones se debe tomar un bus y realizar un viaje de 5 horas soportando los baches de la carretera.

Vida cotidiana

Para el prefecto del Carchi, el desempleo se mantendrá “a menos que el Estado y los sectores productivos creen programas que fomenten las actividades productivas, industriales y turísticas”. Para el INEC, el índice de desempleo es del 11,4%. Las autoridades manifiestan que

67 Datos proporcionados por los habitantes de las zonas visitadas del 23 al 25 de marzo.

68 Información proporcionada por el SIISE, versión 2.5.

69 Dirigentes parroquiales de Tufiño, Chical, Maldonado y Tobar Donoso, 2005.

el poco empleo que subsiste en la provincia, especialmente en actividades agropecuarias, está siendo ocupado por colombianos que se emplean informalmente con bajos salarios respecto a la población local. Por ejemplo, un albañil de Ecuador gana USD 10 mientras que un trabajador ilegal de USD 3 a 4 (Albañil de Tulcan, 2005). Además, “el comercio ha declinado como efecto de la dolarización, lo que provoca que los turistas ecuatorianos vayan a Colombia a comprar: víveres y ropa”, dice un comerciante de Tulcán.

La situación en poblaciones y comunidades ubicadas en la línea de frontera norte es lamentable como el caso de Tobar Donoso: falta de servicios básicos, precariedad en sistemas de comunicación y deficiente infraestructura básica. En la población de San Marcos no hay vías de acceso de carreteras y la gente depende de la ayuda que dan los militares con aprovisionamiento de comida y medicina en un helicóptero “Súper Puma del ejército”.

Al hablar del Plan Colombia con los moradores de Tufiño y Maldonado manifiestan que el problema es cuando se escuchan sonidos de balas en el lado colombiano, lo que ha generado que decenas de desplazados vengán a refugiarse en el coliseo del pueblo por dos o tres días. La forma de colaboración ha sido la de preparar una olla popular para los visitantes del norte. De igual manera las autoridades de la zona han pedido recursos al Estado para la ayuda a los desplazados: comida, papel higiénico, jabón, toallas y colchones (Jefe parroquial de Tufiño, 2005). A la vez, ha comenzado a extenderse la práctica del cobro del temido *impuesto de guerra*, una forma violenta de tributación informal establecida por guerrilleros y paramilitares en Colombia. Como resultado varios dueños de haciendas han abandonado sus tierras o las han tenido que vender a precios bajísimos.⁷⁰

Participación ciudadana

En las poblaciones de Tufiño, Maldonado y Chical lo que exige la comunidad es mayor atención en servicios básicos: salud, carreteras y trabajo. La gente en estas poblaciones vive de la ganadería y la agricultura “pero debido a la dolarización los precios son muy altos por lo que en muchas ocasiones es preferible comprar leche y papas en Colombia” (Campesino de Tufiño, 2005).

En varias asambleas realizadas en las comunas fronterizas del Carchi se ha manifestado la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de los planes, programas y proyectos de desarrollo integral rural en cada cantón en materia de salud, educación, vi-

⁷⁰ Datos recolectados en conversaciones con gente en la zona de Tufiño el 23 de marzo de 2005.

vienda, trabajo, turismo y seguro campesino: "...esas políticas sociales y económicas no deben venir desde el poder central, sino más bien ser trabajadas desde los gobiernos locales"⁷¹.

Vulnerabilidad social y alerta temprana

En el cantón de Tulcán la pobreza según indicadores de NBI es del 50,02% y la extrema pobreza es del 22,84% (SIISE, 2004). Según fuentes policiales, el lavado de dinero en Tulcán es muy alto al tener Colombia como vecino a un país dolarizado. Los agricultores de Tufiño, Chical y Maldonado exigen al gobierno central declarar en emergencia económica a la provincia por la crisis que atraviesa y crear una política pública agraria que favorezca al sector. De lo contrario, las haciendas y fincas seguirán reduciendo el personal o deberán ponerse a la venta al mejor postor.

El cantón Tulcán tiene un considerable servicio de salud; mientras que el resto de pueblos, como Tufiño, Maldonado, Chical y Tobar Donoso, sólo cuentan con un subcentro de salud con una débil infraestructura (camillas, medicinas, gases, inyecciones, jeringuillas, vacunas, laboratorios). San Marcos depende de la buena voluntad de los militares que van a la zona o de los largos viajes que deben hacer los moradores por vía fluvial a Esmeraldas o Maldonado. Se considera que si no se resuelve el problema de la construcción de centros mejor equipados podría no satisfacerse la demanda de servicios médicos debido a las enfermedades en la zona, o será necesario que los moradores migren a los centros urbanos más cercanos. Se habla ya de una migración interna hacia Ibarra, Quito y Guayaquil.

3.5.2. Esmeraldas

Educación

Hay 62 escuelas primarias, de los cuales 52 son fiscales, y 16 colegios en el cantón (SIISE, 2004). La mayor actividad que realizan los padres de familia es la pesca, mientras las madres se dedican a la recolección de conchas y los quehaceres domésticos.

Los habitantes de las poblaciones colombianas mandan a sus hijos a estudiar en las escuelas en el lado ecuatoriano. Atravesar el río desde Candelilla (Colombia) hacia Palma Real demora media hora, tomando un bote que sale a las 7 de la mañana y cuesta 1000 pesos (Moradores de Candelilla y Palma Real, 2005). La situación de las escuelas es desesperante en San Lorenzo en época de invierno, al haber

71 Ideas dadas por el prefecto del Carchi, René Yandún el 21 de marzo de 2005 en Tulcán.

charcos de agua en las canchas deportivas, hierba crecida en los jardines, paredes enmohecidas y techos con goteras (Moradora de San Lorenzo, 2005).

Salud

Palma Real no tuvo médico por 30 años, tan sólo un auxiliar de enfermería. En la actualidad cuenta con un médico nativo del sector cursando la rural por un año. Tiene recelo que al acabar lo manden para Quito o Esmeraldas (capital provincial). Su función consiste en vacunar a niños y adultos contra el paludismo y el dengue, y en brindar medicina gratuita a los niños que sufren de diarrea. Gracias a las vacunas nadie es vulnerable a enfermedades transmitidas por mosquitos (Médico del centro de salud de Palma Real, 2005). Cuando algún morador debe operarse o recibir atención de emergencia debe viajar a San Lorenzo o a la capital provincial, Esmeraldas.

Cuadro 6
Vivienda Provincia

Detalle	Total	Porcentaje
Viviendas Totales	100.620	
Viviendas Particulares ocupadas	84.249	
Servicio de Agua		35,49%
Servicio de luz eléctrica		75,62%
Servicio de eliminación de basura por carro		50,57%
Servicio de eliminación de aguas servidas		30,47%
Servicio telefónico		22,31%

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda, 2001.

La mayoría de casas en las poblaciones del manglar son construidas de caña y están encima de la ría. La UDENOR-USAID-OIM ha construido sistema de agua potable en Palma Real y Tambillo. En el caso de San Lorenzo debido a la alta migración y al crecimiento desordenado de la ciudad⁷² hay sectores donde no se recibe agua potable ni agua entubada. De igual forma pasa con la energía eléctrica: “la planta no da más y por eso hay racionamientos de 4 hasta 12 horas diarias, por la cantidad de gente que hay en el pueblo”, dice un morador de San Lorenzo. El resto de las poblaciones tienen planta propia de luz y pagan 50 centavos al mes por el servicio.

72 Hasta antes del año 2000, en San Lorenzo habían menos de 1000 habitantes, ahora se calcula que hay más de 5000. Cálculo hecho por funcionario de la OIM en San Lorenzo el 6 de abril de 2005.

Infraestructura social

Palma Real se inunda, en gran medida, por efecto de la marea, situación que es aprovechada por la población para deshacerse de la basura y los desechos orgánicos que se desplazan hacia el estuario por efectos de la corriente. La telefonía pública es deficiente y el 42% de las viviendas no dispone de energía eléctrica. Todo esto agrava la calidad de vida de la población de Palma Real (Médico del centro de Salud de Palma Real, 2005). La UDENOR, la OIM y la USAID construyeron en el 2003 el puente Kennedy sobre el río Nadadero en San Lorenzo; también el sistema de agua potable en Palma Real, en donde cada casa tiene su propio medidor de agua. En la actualidad se tiene planificado ampliar el servicio de alcantarillado sanitario de San Lorenzo (UDENOR, 2004).

Vida cotidiana

En San Lorenzo, el 84% de la población es vulnerable⁷³ a participar de actividades ilegales. La mayoría de los moradores viven de la pesca, la recolección de concha y de los trabajos en las palmicultoras, de donde se extrae el aceite vegetal. Cada uno recibe un sueldo de 4 a 5 dólares diarios lo cual debe ser repartido a la familia para los gastos del hogar: comida, medicina, vestimenta, útiles escolares, entre otros.

Las relaciones entre civiles y militares-policías son buenas cuando se refiere a dar seguridad en la zona, pero “son dos mundos diferentes... ellos viven en sus cuarteles y nosotros en la ciudad” (Funcionaria de la Fundación Génesis, 2005) dice la representante de la Fundación Génesis. La presencia de infantes de marina y de la policía es para controlar el orden en cada una de las poblaciones visitadas; por ejemplo, en Mataje, los infantes van dos veces a la semana para ver la situación de la frontera, “se quedan una hora y luego se van”. En el caso de Palma Real los infantes de marina y la policía hacen presencia para el control de documentos tanto a extranjeros como a nacionales. A inicios del año 2004, los moradores habían solicitado a los infantes navegar más seguido por la alta cantidad de robos a pescadores por parte de piratas colombianos, pero “la acción no se realizó, pero los *paras* de Tumaco nos hicieron ese favor [...] ahora navegar por el mar es más tranquilo” (Pescador de San Lorenzo, 2005).

Participación ciudadana

Moradores del sector de Mataje manifiestan que se sienten seguros al contar con el apoyo de infantes de marina para evadir la

73 En este caso vulnerable se refiere a que las condiciones socio-económicas pueden afectar el estilo de vida miembros de una comunidad, obligándolos a participar en actividades ilícitas para poder sobrevivir.

inseguridad, pero en cambio “los servicios de agua potable, luz y alcantarillado son malos; por lo tanto han exigido a las autoridades provinciales que tomen nota sobre el asunto pero no se han visto resultados” (El Universo, 2004). Los representantes de las comunas de Palma Real y Tambillo conocen las obras de la UDENOR y la OIM, pero a la vez consideran que “son proyectos de escritorio planificados en Quito... ellos no vienen acá a conversar con el pueblo y conocer nuestras demandas, sólo vienen a inaugurar las obras y se regresan pa’ Quito”, comenta un pescador de Mataje. Así, se demuestra una vez más que los programas y proyectos son planificados desde la ciudad capital e ignoran por completo la opinión de los beneficiarios.

Vulnerabilidad social y alerta temprana

En lo referente a la pobreza según NBI, el cantón de San Lorenzo tiene el 82,72% de población pobre y el 47,31% en condiciones de extrema pobreza (SIISE, 2004) lo que ha generado que los moradores de estas zonas pasen al sector colombiano a cooperar con los diversos actores del conflicto interno: en los cultivos de hoja de coca o sirviendo de intermediarios en la venta ilegal de armas, municiones y productos químicos hacia Colombia. Tal fue el caso de varios pescadores y concheros de San Lorenzo que manifestaron “[...] no hay más opciones para subsistir en estos pueblos olvidados [...] una de dos, nos morimos de hambre al recibir salarios bajísimos o vamos donde el dinero es fácil”.

La participación ciudadana en la zona es muy pobre ante la falta de educación de las personas sobre derechos y obligaciones como ciudadanos; por tal motivo, la injusticia social se hace muy relevante en cada uno de los cantones esmeraldeños. Como resultado la población es dependiente de líderes caudillistas que los representen a nivel político para la resolución de problemas ante las autoridades públicas de la zona.

3.5.3. Sucumbíos

Educación

Campesinos residentes en las selvas de los cantones de Lago Agrio y Putumayo se vieron obligados a retirar a sus hijos de la escuela por la falta de trabajo. “Yo sólo no puedo sostener a mi familia, mis hijos de 9 y 12 años ya están grandes y deben ayudarme a desyerbar... si se da cuenta usted, la vida en el campo es bien dura y uno debe trabajar”, dice un campesino residente a pocos kilómetros de Puerto El Carmen del Putumayo. De igual forma, la calidad de la

educación no es tan buena. La mayor parte de la gente en las zonas fronterizas sabe leer y escribir, pero “si se les pregunta sobre cultura general o sobre la historia del país, simplemente no saben”, dice el presidente de la Unión Nacional de Educadores-UNE de Sucumbíos.

La explicación a este atraso educativo se centra en el abandono por parte del Estado, situación que “se ha visto agudizada por la crisis económica que atraviesa el país y por las políticas neoliberales puestas en práctica en los últimos años”(Dirigente UNE, 2005), lo que ha generado una reducción del presupuesto al sistema educativo desde 1998. Por ejemplo, en una entrevista hecha al vocero de la UNE-Sucumbíos comenta que “el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y Cultura no satisface la demanda educativa al no extender el número de partidas docentes que requiere la provincia, razón por la que muchas escuelas unidocentes están cerradas y en muchas otras los padres de familia se encargan del pago a los maestros, como es el caso de las zonas rurales”.

Salud

Según el Plan Participativo de Desarrollo de Sucumbíos del Consejo Provincial, el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano abandonó la política de construcción de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) y en su reemplazo, para 1996, dispuso el modelo de los Sistemas Descentralizados de Salud (SDS), que para algunos está más “relacionado con las necesidades institucionales y estatales de supervivencia en una coyuntura neoliberal, que con las necesidades del pueblo” (Representante CEDIME, 2005). La gente que vive en el campo obligatoriamente debe ir a Lago Agrio para ser atendida, ya que la atención que se brinda no es suficiente para la demanda de medicamentos y atención. “Acá en el campo no vienen muchos médicos ya que tienen miedo de que algo malo les pase [...] con esto del conflicto colombiano muchos piensan que es zona de guerra”, dice un viajero de la ruta Lago Agrio-Puerto El Carmen.

Especial análisis y atención merecen en Sucumbíos, la incidencia de enfermedades que afectan la salud debido a la contaminación petrolera que crece cada día, sin que se hayan establecido formas de control del impacto en las poblaciones localizadas en esta provincia. Por ejemplo, hasta la fecha no se han realizado estudios o investigaciones en torno al impacto en la salud que producirá la construcción del nuevo oleoducto de crudos pesados (El Universo, 2003).

Cuadro 7
Vivienda Provincia

Detalle	Porcentaje
Servicio de agua por tubería en el interior	11,1%
Servicio de luz eléctrica	38,1%
Servicio de eliminación de basura por carro	19,8%
Servicio de eliminación de aguas servidas	27,4%
Hogares con servicio higiénico	14,7%
Viviendas con hacinamiento	38,8%

Fuente: INEC, VI Censo de Población y Vivienda, 2001.

En la ciudad de Lago Agrio y Puerto El Carmen de Putumayo las casas poseen agua potable y luz eléctrica, pero en el campo la situación es muy diferente. La mayoría de campesinos dependen del río para abastecerse de agua o de los *tanqueros* que van de vez en cuando a repartir agua a 5 dólares en galón. Las poblaciones que están en las riberas del río San Miguel y del Putumayo no tienen un buen servicio de luz, muchas veces pasan las noches a oscuras. Lago Agrio, Puerto El Carmen y La Punta gozan de buen alumbrado público.

El servicio de recolección de basura en las zonas rurales es muy deficiente. Lo que suele hacer la mayoría de campesinos es quemar los desechos sólidos y botar al río o a la tierra los líquidos. Los campesinos de las zonas rurales comparten los servicios higiénicos que les fueron otorgados por el FISE en el 2002.

Infraestructura social

La labor de la UDENOR con la USAID y la OIM ha consistido en la construcción del sistema de agua potable en Lago Agrio, la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de agua potable en Puerto El Carmen del Putumayo. Las autoridades municipales reconocen la labor de estas instituciones (UDENOR, 2004). Otras obras realizadas fueron los puentes a lo largo de la carretera Lago Agrio-Puerto El Carmen, aunque hay sectores donde la carretera no está pavimentada, y los baches hacen que un viaje lleve hasta 5 horas.

Ante la debilidad del Estado en el Ecuador, una mujer oriunda de la población limítrofe de Santa Elena dijo que la falta de recursos básicos y dependencias públicas hizo que la población dependa de los servicios que ofrece el gobierno colombiano y la guerrilla "...hasta nuestros hijos, que nacieron en el Ecuador, como sus padres, fueron inscritos en el Registro Civil de Colombia: cedieron su nacionalidad".

Vida cotidiana

Frente a la situación del Plan Colombia el alcalde de Nueva Loja, Máximo Abad, explicó que los efectos de dicho plan son graves y que la situación de inseguridad que se vive en el sector fronterizo del vecino país ha provocado un incremento de ciudadanos colombianos en la provincia de Sucumbíos. “No en todas las épocas podemos decir que hay inseguridad, en todo caso la mayor acción delictiva ocurrió con los hechos homicidas hace dos años⁷⁴. El temor de ahora es que los agricultores del sector fronterizo deben abandonar sus fincas o vender a precios más bajos, pero no exactamente a otros colonos ecuatorianos”, señaló Abad.

La situación de los desplazados es muy precaria, tan sólo los que gozan de ser refugiados llegan a los albergues del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del ISAMIS⁷⁵. Los que no son calificados dependen de la buena voluntad de los moradores del barrio “Las Palmeras”⁷⁶ para poder sobrevivir. Un campesino procedente de Caquetá comenta:

en mi tierra yo vivía del cultivo del maíz, lo que me ayudaba para el diario, pero eso no era suficiente ya que en la zona no hay trabajo...a más de eso los paramilitares amenazaron de muerte a toda mi familia por suponer que colaborábamos con la guerrilla [...] yo soy un hombre bien pobre, pacífico y trabajador, pero tuve que huir [...]vengo acá y veo lo mismo, desempleo y pobreza...unos amigos de la fundación Rompiendo Barreras por la Paz⁷⁷ me dan comida y alojamiento [...] ahora de lo que vivo es de las arepitas que vendo en la avenida Quito de Lago Agrio (Desplazado colombiano, 2005).

Participación ciudadana

Los paros han sido la única manera, en los últimos cuatro años, de pedir al gobierno una mejora en la educación, la salud y apoyo al sector

74 Del 2001 al 2003 se vivieron tiempos de inseguridad en la zona ante la cantidad de desaparecidos y muertos en la ciudad. Todo se manejaba bajo el sistema de “ajuste de cuentas” entre narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, delincuentes comunes colombianos y sus socios en el lado ecuatoriano. En una semana aparecieron 15 muertos en diferentes sitios de Lago Agrio. (Funcionario del Municipio de Lago Agrio, 2005).

75 Nota del Editor: La autora se refiere a la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, que depende de la Misión Carmelita.

76 Este barrio está compuesto por migrantes colombianos que han vivido en el sector por más de 10 años.

77 Fundación creada por la Mesa Binacional colombo-ecuatoriana hace pocos años frente a la cantidad de refugiados procedentes del sur de Colombia. Dan albergue y comida a desplazados.

productivo. El alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, ha sido uno de los principales actores en la lucha política hacia el gobierno central, a pesar de los constantes enfrentamientos con la fuerza pública. A pesar de haber presencia policial y militar en la provincia, la ciudadanía lo que más pide es interés del Estado en lo social, económico y en las fumigaciones que afectan a las poblaciones aledañas al departamento de Putumayo en Colombia.

La presidente de la Cámara de Turismo de Sucumbíos, Glenda Astudillo, cree que no hay participación de la comunidad, que cada grupo defiende sus propios intereses y que ha sido muy difícil llegar a puntos comunes. Con lo referente al Plan Colombia, Astudillo cree que los medios de comunicación han generado una mala imagen de la provincia al referirse como una zona insegura, llena de extorsiones, muertes y secuestros. “Violencia hay en todas partes pero no al grado como se la pinta en la televisión, debido a eso el turismo es muy pobre en la zona” (Astudillo, 2005).

Vulnerabilidad social y alerta temprana

La pobreza clasificada según NBI es del 84,2% y la pobreza extrema del 40,11% en el cantón Lago Agrio; en Putumayo, encontramos 94,46% de pobreza y el 54,29% de pobreza extrema. En el cantón Sucumbíos la pobreza es del 74,93% y la pobreza extrema del 45,7%. En el cantón Cascales el 80,81% de la población es pobre, mientras que el 39,78% vive en condiciones de pobreza extrema (SIISE, 2004). Es decir que la pobreza es superior que en Esmeraldas, debido a la cantidad de desplazados pobres que habitan en Lago Agrio. Por lo general ellos viven del comercio informal y trabajando como mano de obra barata. Viven como ilegales en las calles al no contar con los documentos adecuados. Habitan o alquilan casas sin los servicios básicos: agua, luz y teléfono. Desconfían de todo el mundo, debido que no se sabe quién trabaja para cuál de los diferentes actores armados colombianos.

De esta manera se ha logrado describir a breves rasgos la situación social y económica de los pueblos fronterizos del Ecuador, que son víctimas de la centralización del Estado en la definición de planes, programas y proyectos que fomenten el desarrollo local. Se ha logrado evidenciar que los proyectos de infraestructura elaborados por instituciones como la UDENOR, USAID y la OIM han logrado satisfacer en parte a las demandas de la población al ver en sus pueblos puentes, sistema de alcantarillado y agua potable, luz eléctrica, entre otros; pero no han podido sobresalir a nivel económico y comercial, debido a la crisis en la que se vive desde la vigencia del dólar como moneda oficial.

CONCLUSIONES

Frente a la hipótesis planteada en la presente investigación de que “la debilidad institucional ecuatoriana, relacionada con la forma en que se maneja el desarrollo en la frontera norte, constituye el factor principal que favorece el incremento de la pobreza en la zona” podemos confirmar que la presencia del Estado se hace más evidente a nivel militar/policial mientras que a nivel social (educación, salud) es extremadamente débil.

La debilidad institucional en la frontera se vuelve más acentuada tras la crisis económica de 1999 y la implementación de la dolarización en el 2000, lo que generó que los productos ecuatorianos que se vendían en Colombia se vuelvan caros. El gobierno central no tomó en cuenta los efectos del cambio de moneda en la frontera norte, e incluso hasta en la actualidad mucha gente prefiere comprar productos en la ciudad fronteriza colombiana de Ipiales y no en la ciudad de Tulcán en el Ecuador. Otro aspecto a destacar es la debilidad del rol de los partidos políticos para procesar las demandas de la población, la única manera de hacerse escuchar ha sido por medio de los paros provinciales o huelgas de hambre. Por otra parte, los medios de comunicación con sus noticieros a nivel nacional han pintado una imagen nada atractiva para los turistas que acostumbraban ir a los balnearios de aguas heladas en Tufiño, a las selvas de Lago Agrio y a los manglares de San Lorenzo. No se ve una política por parte del Estado que promueva el turismo en la zona norte del Ecuador y menos aún un plan binacional. En pocas palabras, la presencia del Estado es débil al no haber políticas públicas diseñadas al largo plazo a nivel social, político y económico que integren a los sectores marginados de la nación.

De igual forma, los estados vecinos no han visto como prioridad estratégica el uso de carreteras en la Costa y en la Amazonía para intensificar el comercio entre Ecuador y Colombia; tan sólo existe la salida por la carretera panamericana Tulcán-Ipiales que diariamente cruzan más de mil carros y camiones. De esta manera se podría dar importancia a las Zonas de Integración Fronteriza firmadas a nivel de la CAN.

La investigación sugiere que las fronteras siguen siendo consideradas, por los gobiernos centrales, de poca prioridad frente al desarrollo integral humano, pero de una alta prioridad a nivel militar/policial para la lucha contra el comercio ilegal de drogas y otros negocios derivados como la venta de armas, precursores químicos y logística para los grupos guerrilleros colombianos.

En el caso de Ecuador no se evidencia una política de desarrollo fronterizo propia que cuente con la participación de los gobiernos provinciales y municipales para la planificación y ejecución de pla-

nes, programas y proyectos sociales y económicos. Se debe también considerar que lo que los moradores buscan en la vida cotidiana es subsistir, y para ello necesitan de trabajos seguros; mientras esto no exista campesinos, agricultores, comerciantes y pescadores se verán obligados a buscar otros medios, no tan legales para poder buscar el pan de cada día. Mientras exista esa poca presencia de las instituciones del Estado en las zonas fronterizas, la población civil podría seguir cooperando con la diversidad de actores ilegales que cruzan el límite, como ha sido el caso de Puerto Mestanza (Sucumbíos) o Mataje (Esmeraldas) para poder subsistir o recibir protección.

Por parte de Colombia, en cambio, se ha podido evidenciar una política fronteriza bastante represiva nada vinculada al desarrollo, lo cual ha perjudicado a la vida cotidiana de los moradores de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo. Tal ha sido el caso de los enfrentamientos diarios que se viven entre militares/policías y guerrilla por ganar territorio, entre los cuales también se debe incluir a la población civil que es víctima de la violencia. De igual forma, los programas de desarrollo para disuadir los cultivos de la hoja de coca no han sido tan efectivos por la poca rentabilidad que significan para los campesinos, y por estar en zonas de las fumigaciones, pese a que el estado colombiano no reconoce los efectos del glifosato.

Las acciones fronterizas que hay se han diseñado y ejecutado a nivel independiente por cada país, y también en el marco de la CAN. Sin embargo, existen convenios firmados por ambos países a nivel de migración y medio ambiente, pero sólo han quedado en los escritorios. Además, por parte del Ecuador no se ha tenido una política exterior firme, duradera y certera frente al conflicto interno colombiano para poder tomar decisiones en una determinada coyuntura.

En cuanto al tema de la soberanía, los Estados Unidos frente a la debilidad institucional del Estado han logrado influir en el diseño de las estrategias antinarcóticos y de interdicción, sin que el Ecuador logre desarrollar una para el mediano y largo plazo. Como se ha visto, el COSENA elaboró un plan de desarrollo fronterizo pero éste no ha sido ejecutado de manera eficiente por los gobiernos de turno, haciendo más vulnerable a la población a asociarse en actividades ilícitas. Frente a la ayuda de los Estados Unidos en materia de desarrollo se hace muy evidente la dependencia del Ecuador de toda ayuda que venga del exterior, sin que exista un plan nacional que integre a las diferentes carteras del Estado (Cancillería, ministerios de Gobierno, Defensa, Medio Ambiente, Turismo, Salud, Educación, Bienestar Social, Productividad, entre otros).

Si hubiese liderazgo y un discurso unificado, que persiguiera los mismos fines e intereses, por parte de los secretarios de las carteras de

Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores sería posible, en uso de la soberanía y manteniéndose al margen del conflicto colombiano, tener una política de Estado y retomar los planes abandonados, para tener una frontera desarrollada y una población más protegida por el Estado.

Las labores realizadas por la UDENOR desde el 2001 en las poblaciones fronterizas han logrado integrar a las poblaciones alejadas de las capitales provinciales a los proyectos de desarrollo locales, pero no han sido suficientes para fortalecer la participación ciudadana al diseñar las principales demandas a nivel laboral, social y económico. Las propias asambleas parroquiales han demostrado que dichos proyectos son diseñados y ejecutados por burócratas asentados en Quito, mientras que el desempleo y la falta de inversión en la agricultura, ganadería y pesca no son considerados de alta prioridad dentro del proceso de toma de decisiones de la burocracia quiteña. Lo que da a entender que los recursos para obras son muy limitados y centralizados a las decisiones de Quito y Bogotá, lo que impide acciones a nivel de los gobiernos locales.

Las comunidades fronterizas no se ven con desprecio ni con temor unos a otros, sino más bien se ven como poblaciones hermanas que durante décadas han convivido en medio de la selva y han intercambiado toda clase de productos; pero ante la política colombiana para combatir la producción y el tráfico de drogas la vida cotidiana cambió por completo. Ante la violencia que se ha generado en los departamentos fronterizos colombianos y ante la gran cantidad de desplazados que han llegado en ciertas temporadas al Ecuador, sin que el estado colombiano se preocupe por la situación laboral y social de los desplazados.

Por último, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, mientras la política exterior norteamericana siga considerando como principales actores a los estados, sin reconocer la diversidad de actores transnacionales que se mueven en las fronteras frente a los negocios ilícitos, y siga apostando a la fuerza militar como solución del problema del narcotráfico, contribuirá a producir más vulnerabilidad en Colombia y Ecuador, frente al crecimiento de la pobreza y al abandono estatal en las áreas de salud, educación, fortalecimiento de la democracia e infraestructura para el desarrollo de los pueblos.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, David 2005 *Transferencia y Ayuda Norteamericana hacia América Latina: las prioridades que refleja el presupuesto* (Santiago de Chile: FLACSO-Chile).

Andreas, Peter 2003 *Border Games: Policing the U.S. Mexico Divide* (Cornell University).

- Bagley, Bruce 2001 *Narcotráfico, Violencia y Política Exterior de los Estados Unidos hacia Colombia en los noventas* (Bogotá: CEI).
- 1991 “La política exterior estadounidense y la guerra de las drogas: análisis de un fracaso político” en Bagley, Bruce; Bonilla, Adrián y Páez, Alexei (eds.) *La economía política del narcotráfico* (Quito: FLACSO-North South Center).
- Bonilla, Adrián 1993 *Las Sorprendentes Virtudes de los Perverso: Ecuador y narcotráfico en los 90*(Quito: FLACSO-North South Center, Serie Ciencias Políticas).
- 2000 “Multilateralismo en la Región Andina” en Rojas, Francisco (ed.) *Democracia de Cumbres*(Caracas: FLACSO-Academia Diplomática Mexicana/Nueva Sociedad).
- CAN (Comunidad Andina de Naciones) 2005 *Desarrollo Fronterizo*, Lima, <www.comunidadandina.org> pagina visitada el 3 de mayo del 2005.
- Ceballos, Marcela 2002 *Caracterización Socioeconómica y Política de las Zonas de Frontera en Colombia* (Bogotá: CODHES).
- Cepik, Marco & Ramírez, Socorro (ed.) 2004 *Agenda de Seguridad Andina Brasileira*(Bogotá: Fescol/Iepri/Universidad Federal do Rio Grande do Sul).
- Clawson, Patrick 1998 *The Andean Cocaine Industry* (St. Martins Griffin).
- CODHES (Consultora para los Derechos Humanos y Desplazados) 2005 *Informe de Desplazados Febrero*. Disponible en <www.codhes.org.co> visitada el 2 de marzo del 2005.
- 2005 *Y entonces, ¿Por qué se van?* Bogotá, <www.codhes.org.co> visitada el 27 de julio.
- Contreras, Joseph 2005 “Failed Plan” en: *Newsweek International Magazine*, Agosto 29.
- COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) 2002 *Política de Seguridad de la Frontera Norte*, Quito.
- DE-EUA (Departamento de Estado de los Estados Unidos) 2002 *Los Andes en Peligro: consecuencias ambientales del narcotráfico*, Washington D.C. <<http://usinfo.state.gov/espanol/andes/>> visitada el 3 de julio del 2005.
- 2001; *El Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia*, Washington D.C. <<http://usembassy.state.gov/bogota/wwwspceu.shtml>> visitada el 2 de febrero del 2005.
- De La Vega, Pablo 2004 *Refugiados Colombianos en Ecuador: tendencias y respuestas del Estado y la Sociedad Civil* (Quito: Centro de Derechos Humanos “Segundo Montes”).

- Duro, Rosa 2002 “Plan Colombia o la Paz Narcótica” en 1998-2002. *Colombia: un país en construcción*. (Bogotá: Opera, Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia).
- Fescol (Friedrich Ebert Stiftung de Colombia) 2004 “Desarrollo transfronterizo e integración andina: escenarios para Colombia” en *Policy Paper 10, La Inserción de Colombia en el Sistema Internacional Cambiante Países Vecinos* (Bogotá).
- 2004 “Colombia y Estados Unidos: desafíos de una alianza” en *Policy Paper 1, La Inserción de Colombia en el Sistema Internacional Cambiante Países Vecinos* (Bogotá) enero.
- 2004 “¿Es Posible Disminuir la Emigración Transfronteriza?”, en *Policy Paper 8, La Inserción de Colombia en el Sistema Internacional Cambiante Países Vecinos* (Bogotá) septiembre.
- 2004 “El Desarrollo de Regiones: ¿relanzamiento de la integración andina?” en *Policy Paper 7, La Inserción de Colombia en el Sistema Internacional Cambiante Países Vecinos* (Bogotá) septiembre.
- 2004 “Sociedad Civil y Seguridad Regional: retos para una articulación democrática” en: *Policy Paper 2, Cooperación en la Seguridad Regional Andina*, (Bogotá) noviembre.
- 2003 “Colombia y sus Vecinos” en *Policy Paper 6, La Inserción de Colombia en el Sistema Internacional Cambiante Países Vecinos* (Bogotá) diciembre.
- Fontaine, Guillaume 2003 *Crisis de la Gobernabilidad y Dolarización en Ecuador. Una Mirada Retrospectiva al Golpe de Estado del 21 de Enero 2000* en Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya, Colección de Documentos.
- Franco, Andrés 1997 “Las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos” en Andrés Franco (ed) *Los Estados Unidos y los Países Andinos, 1993-1997: poder y desintegración* (Bogotá: Centro Editorial Javeriano).
- Hurtado, Osvaldo 2001 *Los Desafíos de la Dolarización para el Ecuador* (Quito: CORDES-CAF).
- Isacson, Adam 2001 *Plan Colombia’s: Ground Zero. A Report from CIP’s to Putumayo Colombia*, (Los Angeles: Center for International Policy). <<http://www.ciponline.org/colombia/0401putu.htm>> visitada el 8 de diciembre del 2004.
- 2000 *Colombia Aid Package*, Center for International Policy, January 29 <<http://www.ciponline.org/colombia/012901.htm>> vistada el 9 de diciembre del 2004.

- Jarrín, Oswaldo 2005a “El libro blanco” *El Universo* (Guayaquil) 3 de junio.
- Jarrín, Oswaldo 2005b “No hay política de seguridad” *El Universo* (Guayaquil) 15 de julio.
- Leal, Francisco 2004 “La Seguridad durante el Primer Año de Álvaro Uribe Vélez” en *Revista Análisis Político* (Bogotá) N° 50, enero-abril.
- Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador (MRE) 2005 Aspectos Fronterizos, documento oficial, <www.mmrree.gov.ec> visitada el 7 de junio del 2005.
- Miranda José 2003 *Proceso de evaluación de proyectos*, Documento de Trabajo. (Quito).
- Naím, Moisés 2003 “Las cinco guerras que estamos perdiendo” en *Foreign Policy* (Ciudad de México), Vol. 3, N° 1, enero-marzo.
- Oliveros, Alberto 2003 “El concepto de frontera en el contexto y en la perspectiva de la integración andina”. Disponible en Documentos de la Integración Andina, página web de la CAN, <www.comunidadandina.org> visitada el 3 de febrero del 2005.
- Policía Nacional de Colombia 2005 “Informe de Labores” en *Revista de la Institución*, Bogotá. Disponible en <www.policia.gov.co> visitada el 27 de mayo del 2005.
- PNUD 2003 *Informe Desarrollo Humano* (Bogotá).
- Ramírez, Socorro 2004 “Desarrollo y Seguridad en la frontera Andina-Brasilera” en Cepik, Marco & Ramírez, Socorro (eds.) *Agenda de Seguridad Andina Brasileira* (Bogotá: Fundación Friedrich Ebert/IEPRI/Universidad do Río Grande).
- Randall, Stephen 1992 *Aliados y distantes: historia entre las relaciones entre Colombia y los EE.UU. desde la independencia hasta la guerra contra las drogas* (Bogotá: Universidad de los Andes/ Tercer Mundo Editores).
- Segell, Glen 2000 “The Narcotics War and Civil-Military Relations” en International Studies Association, 41st Annual Convention, Los Angeles, 12-14 de marzo.
- Thoumi, Francisco 2005 “Las Drogas Ilegales en Afganistán y Colombia” en *Revista Análisis Político* (Bogotá), #54: mayo-julio.
- UDENOR 2004 *Informe de Labores* (Quito).
- 2003 *Informe de Labores* (Quito).
- 2002 *Informe de Labores* (Quito).
- UNODC 2005 “Censo Cultivos de Coca 2004” (Bogotá: Oficina contra la droga y el delito, Naciones Unidas) disponible en <http://www.unodc.org/pdf/colombia/dricurso%20srcalvani%20informe%20coca.pdf> visitada el 25 de junio del 2005.

Viotti y Kauppi 1988 *Las Relaciones Internacionales en el Siglo XX: la contienda teórica* (Buenos Aires:Ed. UNED).

WOLA, Washington Office On Latin America 2005a *Diluyendo las divisiones: tendencias de los programas militares de EE.UU. para América Latina* (Washington DC).

——— 2005b *SouthCom paints accurate picture of Latin America's ills, proposes wrong solutions* (Washington D.C).

FUENTES

Diario El Comercio 2005 “Bush da apoyo a Uribe con el Plan Colombia” (Quito) 5 de agosto.

Diario El Comercio 2005 “Ecuador es una plataforma de acopio y envío de coca” (Quito) 4 de septiembre.

Diario El Comercio 2005 “Tensión entre Ecuador y Colombia por propuesta de Visa” (Quito) 28 de junio.

Diario El Comercio 2004 “Fronteras” (Quito) 16 de marzo.

Diario Hoy 2005 “La Salud y la Educación son desatendidas” (Quito) 14 de agosto.

Diario El Universo 2004 “La frontera norte y su vulnerabilidad” (Guayaquil) 8 de marzo.

Diario El Universo 2003 “La Amazonía en crisis” (Guayaquil) 15 febrero de 2003.

Diario El Tiempo 2005 Entrevista realizada a Álvaro Sierra “La vulnerabilidades fronterizas” (Bogotá) 31 de mayo.

Diario El Tiempo 2003 “En los Confines de Colombia” (Bogotá) 10 de agosto.

Revista Semana 2004 “El Río de la Guerra” (Bogotá) N°522, 19 de julio.

Diario El Espectador 2005 “Tan cerca y tan lejos” (Bogotá) N°67, 27 de mayo.

ENTREVISTAS

Entrevista a Marcela Cevallos, Funcionaria del CODHES (Bogotá) 31 de mayo de 2005.

Entrevista al Gral. René Yandún, Prefecto del Carchi, Carchi, 15 mayo de 2005.

Entrevista a Funcionario de la UDENOR, en Quito, 16 de marzo de 2005.

Entrevista a Alfredo Rancel, Funcionario de la Fundación Seguridad y Democracia, en Bogotá, 25 de mayo de 2005.

Entrevista al diputado Julio Gonzáles, Presidente de la Comisión de Asuntos Amazónicos y Fronterizos del Congreso Nacional, en Quito, el 6 de julio de 2005.

- Entrevista a Marta Ardila, Funcionaria de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado, en Bogotá, el 23 de mayo de 2005.
- Entrevista a Francisco Leal Buitrago, Consultor de la Universidad de Los Andes en temas de Política Exterior, en Bogotá, 24 de mayo de 2005.
- Entrevista con el coordinador de la UDENOR en Lago Agrio, Marcelo Sandoval, 10 de marzo de 2005.
- Entrevista con Gonzalo Gonzales, Funcionario de la UDENOR, 18 de marzo de 2005 en Quito.
- Entrevista a Andrés Carvache, Corredor Turístico Costa Verde, en San Lorenzo, 6 de abril de 2005.
- Entrevista a Eugenia Restrepo Uribe, Funcionaria del Programa de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia de la Presidencia de la República, en Bogotá, 31 de mayo de 2005.
- Entrevista a Oscar Izquierdo, Funcionario de la Dirección General de Relaciones Fronterizas con Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 6 de mayo de 2005.
- Entrevista a Efrén Piñas, Funcionario del CINEP - Proyecto Putumayo, en Bogotá, el 1 de junio de 2005.
- Entrevista a Julio Oleas, presidente de la Cámara de Comercio del Carchi, en Tulcán, 22 de marzo de 2005.
- Entrevista a Pancho Calvopiña, Director del Diario *El Norte*, en Tulcán, 21 de marzo de 2005.
- Entrevista a Eduardo Álvaro, Oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en Lago Agrio, 3 de marzo de 2005.
- Entrevista a Francisco Thoumi, Director del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario, en Bogotá, el 24 de mayo de 2005.
- Entrevista a Daniel Alarcón, líder barrial, en Lago Agrio, 9 de marzo de 2005.
- Entrevista a Miguel Gutiérrez, líder sindical, en Lago Agrio, 9 de marzo de 2005.
- Entrevista al Gral. René Yandún, Prefecto del Carchi, en Tulcán, el 1 de abril de 2004
- Entrevista a Pedro Velasco, Alcalde de Tulcán, el 25 de mayo de 2004.
- Entrevista a Rosa Maria Chicaiza, líder campesina en Tobar Donoso, 24 de marzo de 2005.
- Entrevista a Marcela Charfuelán, campesina, en Tulcán, el 22 de marzo de 2005.

- Entrevista a Manuel Pico, dirigente parroquial, recorrido por Tufiño, Chical, Maldonado y Tobar Donoso, el 23 de marzo de 2005.
- Entrevista a Pedro Chulpi, Albañil, en Tulcán, 21 de marzo de 2005.
- Entrevista a Juan Donoso, Jefe Parroquial de Tufiño, en Tufiño, marzo 2005.
- Entrevista a Ramiro Moreno, Campesino, en Tufiño, 23 de marzo de 2005.
- Entrevistas a Julio Poveda y a Maria Collahuaso, moradores de ciudades fronterizas ecuatorianas y colombianas, en Candelilla y Palma Real, taller parroquial, abril 2005.
- Entrevista a Paco García, líder barrial, en San Lorenzo, 6 de abril de 2005.
- Entrevista realizada a Mario Ramos, Médico del centro de salud de Palma Real, en Palma Real, 7 de abril de 2005.
- Entrevista a Rosa Cruz, Funcionaria de Fundación Génesis, en San Lorenzo, 7 de Abril de 2005.
- Entrevista a José Panda, Pescador, en San Lorenzo, 6 de abril de 2005.
- Entrevista a Sebastian Mantilla, Dirigente de la Unión Nacional de Educadores -UNE-, en Lago Agrio, 7 de marzo de 2005.
- Entrevista a Carlos Cabrera, Representante del Centro de Investigaciones de Movimientos Sociales del Ecuador CEDIME, en Lago Agrio, 9 de marzo de 2005.
- Entrevista a Julio Pinto, Desplazado colombiano, en Lago Agrio, 10 de marzo de 2005.
- Entrevista a Glenda Astudillo, líder barrial, en Lago Agrio, 11 de marzo de 2005.
- Entrevista a Campesinos del río San Miguel en la frontera colombo-ecuatoriana, en: Programa *Día a Día*, Maritza Sánchez, Teleamazonas, febrero de 2004.